

**Construcción del precedente constitucional sobre la protección del derecho fundamental a la salud y la seguridad social en Colombia: análisis de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional.**

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Trabajo final presentado por: | Andry Pauler Correa López                 |
| Programa:                     | Especialización en Derecho Constitucional |
| Docente:                      | Ivón Dayann Gil Pedreros                  |
| Fecha:                        | Julio 28 de 2026.                         |

## Contenido

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| <b>Resumen</b> .....                                           | 3  |
| <b>Abstract</b> .....                                          | 4  |
| <b>1. Introducción</b> .....                                   | 4  |
| 1.1. <b>Contexto del tema</b> .....                            | 5  |
| 1.2. <b>Delimitación del tema</b> .....                        | 6  |
| 1.3. <b>Pregunta de investigación</b> .....                    | 6  |
| 1.4. <b>Justificación</b> .....                                | 6  |
| <b>2. Metodología</b> .....                                    | 7  |
| 2.1. <b>Enfoque y método de análisis jurisprudencial</b> ..... | 8  |
| <b>3. Desarrollo de investigación</b> .....                    | 10 |
| 3.1. <b>Cuadro inicial de fichas jurisprudenciales</b> .....   | 10 |
| 3.2. <b>Línea de tiempo jurisprudencial</b> .....              | 44 |
| 3.3. <b>Matriz comparativa</b> .....                           | 45 |
| 3.4 <b>Análisis de Tendencias Jurisprudenciales</b> .....      | 50 |
| 3.5 <i>Coherencia de la jurisprudencia.</i> .....              | 56 |
| 3.6 <b>Conclusión</b> .....                                    | 62 |
| <b>Referencias</b> .....                                       | 63 |

## Resumen

Esté análisis examina exhaustivamente y hasta el final el proceso de construcción, consolidación y transformación de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional de Colombia respecto a la naturaleza jurídica, al alcance y a la exigibilidad del derecho a la salud y la seguridad social. Partiendo de un análisis dinámico del precedente que se extiende de 1997 a 2025, este escrito analiza críticamente las distintas etapas dogmáticas de la Corte, erradicando las visiones parciales a favor de la perspectiva macro institucional.

Además, se desglosa metodológicamente el camino desde un paradigma inicial restrictivo con la "tesis de la conexidad" (entendida como una visión de la salud y de la seguridad social como derechos prestacionales programáticos a través de la vinculación directa a derechos civiles como la vida o la integridad física) hacia una concepción garantista en la que la fundamentalidad autónoma de estos derechos nace directamente del principio de dignidad humana y del mandato de la igualdad material.

El análisis no es solamente un fallo de unificación particularista, sino que se hace sobre el entramado general de las sentencias de unificación (SU) que constituyeron el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se revisa, igualmente, de qué forma el activismo judicial de la Corte, hecho por medio de órdenes complejas, estructurales, y de remedios extra / ultra petita, ha ido haciendo frente de manera sistemática a las barreras administrativas de las EPS, a las omisiones normativas del Legislativo, a las fallas institucionales del Ejecutivo. A su vez, el estudio también analiza el conflicto dialéctico entre la progresividad ampliadora de coberturas (de las dimensiones modernas como el derecho al cuidado, la continuidad de tratamientos y las prestaciones no POS/PBS) y el principio de la sostenibilidad financiera del sistema de salud a carga del Estado (ADRES y Presupuestos Máximos). En última instancia, se acaba demostrando que la jurisprudencia constitucional colombiana se ha comportado como un motor de política pública material, reformulando el contrato social y definiendo los límites de la justicia distributiva del Estado social de derecho.

## **Abstract**

This analysis thoroughly examines the process of construction, consolidation, and transformation of the Colombian Constitutional Court's jurisprudence regarding the legal nature, scope, and enforceability of the right to health and social security. Based on a dynamic analysis of precedent spanning from 1992 to 2026, this paper critically analyzes the Court's various dogmatic stages, eliminating partial views in favor of a macro-institutional perspective.

Furthermore, it methodologically breaks down the path from an initial restrictive paradigm with the "thesis of interconnectedness" (understood as a view of health and social security as programmatic benefits through their direct link to civil rights such as life or physical integrity) toward a rights-based conception in which the autonomous fundamentality of these rights arises directly from the principle of human dignity and the mandate of substantive equality. The analysis is not merely a particularistic unification ruling, but rather examines the overall framework of unification rulings (SU) that established the General Social Security System in Health. It also reviews how the Court's judicial activism, through complex, structural orders and remedies exceeding the scope of the petition (*extra/ultra petita*), has systematically addressed the administrative barriers of the Health Promoting Entities (EPS), the legislative omissions, and the institutional failures of the Executive branch. Furthermore, the study analyzes the dialectical conflict between the progressive expansion of coverage (in modern dimensions such as the right to care, continuity of treatment, and non-POS/PBS benefits) and the principle of the financial sustainability of the health system under the State's responsibility (ADRES and Maximum Budgets). Ultimately, it is demonstrated that Colombian constitutional jurisprudence has acted as a driving force of material public policy, reformulating the social contract and defining the limits of distributive justice in the social rule of law.

### **1. Introducción**

La institucionalización en Colombia del modelo de Estado Social de Derecho mediante la Constitución de 1991 conllevó un cambio de las relaciones entre la ciudadanía y la administración pública, especialmente respecto de la forma de acceso al bienestar social. La salud y la seguridad social eran tipificadas inicialmente en la propia Constitución como Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Es por ello que se encuentran, dificultades administrativas propias de las EPS y los vacíos de normatividad , el recurso de la acción de tutela pasó a ser el principal mecanismo de acceso al sistema de salud , lo que llevó a la Corte Constitucional a adoptar un rol activo en la creación de sub regulaciones no sólo para proteger situaciones particulares, sino para proferir órdenes de políticas públicas con fiscal de gran envergadura, se constituyen en un robusto bloque de precedentes obligatorios que redibujan parcialmente el ámbito de protección por parte del Estado.

### 1.1. Contexto del tema

La contextualización desde la cual se hace esta investigación es la tensión constante existente entre tres variables: el diseño legal del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Ley 100 de 1993 y modificaciones), el texto constitucional y la realidad socioeconómica del país. - Etapa de Conexidad (1992-2007): Al principio, la Corte aplicaba una doctrina restrictiva mediante la cual se protegía la salud sólo si su vulneración ponía en riesgo inminente la vida o la integridad física (derechos fundamentales de aplicación inmediata).

- Etapa de Fundamentalidad Autónoma (2008- Hoy): La expedición de pronunciamientos estructurales (tanto en sede de revisión de tutela como en el control de constitucionalidad de leyes estatutarias), marcó un punto de inflexión al declarar que la salud es un derecho autónomo fundamental por su relación íntima con la dignidad humana, criterio validado por el legislador en la Ley Estatutaria 1751 de 2015.

- Marco Actual (Límites y Ampliaciones): En la actualidad, el debate legal general se enfoca en los límites del Plan de Beneficios en Salud (PBS), los Presupuestos Máximos (MIPRES), los recobros, el control de los recursos y la disponibilidad gradual del derecho hacia enfoques diferenciales, interseccionales y de corresponsabilidad social (como el derecho al cuidado o la salud mental) que atraviesan una complicada crisis de sostenibilidad del sistema.

## 1.2. **Delimitación del tema**

- Delimitación Temática: El estudio estará centrado en la revisión de la jurisprudencia de la Corte Constitucional (las Sentencias SU) que se ocupan estrictamente del núcleo esencial del derecho a la salud, de la continuidad del servicio, de las exclusiones a tenor del Plan de Beneficios y de la seguridad social en salud. No se van a analizar líneas sobre pensiones o riesgos laborales, sino en su intersección precisamente cuando afectan a las prestaciones de salud.

- Delimitación Temporal: 1997 (inicio de las labores de la Corte Constitucional) a 2025 (donde se han ido adosando hasta los debates más actuales sobre la evolución regulatoria y prestacional del sistema de salud). Delimitación Espacial: República de Colombia, centrada en el alcance nacional que tienen los precedentes y por tanto su fuerza vinculante en la medida que afecta igualmente a los órganos de la administración central, a los operadores de salud y a los jueces de la República.

## 1.3. **Pregunta de investigación**

¿cuáles han sido los avances en la consolidación del precedente constitucional de la corte constitucional de Colombia en relación con la naturaleza jurídica y el alcance del derecho fundamental a la salud y el derecho a la seguridad social entre los años 1997 y 2025?

## 1.4. **Justificación**

La relevancia teórica y la pertinente relación jurídica de esta ponencia se encuentra en la necesidad de estudiar la metamorfosis hermenéutica de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en el emergente constitucionalismo del Sur Global, teniendo en cuenta a Colombia como un laboratorio judicial emblema ático. Si se estudia la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, se logra teorizar la difícil mutación de la salud y la seguridad social desde orientaciones programáticas de mejora hacia derechos subjetivos autónomos, exigibles

directamente y de disposición inmediata. En este análisis global del proceso de los fallos constitucionales se puede vislumbrar cómo el precedente no sólo resulta una fuente formal del derecho, sino un mecanismo de actualización de la norma que cubre los agujeros que deja el Legislativo como también es la imposición de barreras por parte de las entidades aseguradoras. Por esto la ofrece una conceptualización necesaria para que el ámbito académico y los operadores jurídicos pongan a prueba o se interrogan de qué manera el constitucionalismo vigente logra mantener la lógica interna de la doctrina constitucional y puede realizar predicciones intentadas a lo largo de las decisiones judiciales en el marco de los contextos con alta litigiosidad.

## 2. Metodología

La metodología de esta investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo de tipo dogmático-jurídico y basa su estructura en el método analítico, así como la técnica de análisis dinámico de líneas jurisprudenciales propuesta por el profesor Diego López Medina. La investigación se estructurará en función de la identificación de un nicho de citas cerrado y especializado, que forma parte de las diez (10) providencias de unificación previamente delimitadas para el periodo 1997-2025. Para ello, operativamente se llevará a cabo la implementación de una matriz de extracción de información, que nos permitirá desmenuzar cada pronunciamiento y, así, poder aislar de forma estricta los hechos constitucionalmente relevantes, los problemas jurídicos específicos de instancia y, sobre todo, la ratio decidendi de cada decisión adoptada.

Esto se realiza a través del análisis de los precedentes y la reconstrucción de la ingeniería constitucional de las sub-reglas generadas por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, así como la práctica de un análisis comparativo y dialéctico que establece la evolución,

los puntos de confluencia y los desplazamientos conceptuales de la jurisprudencia ordinaria y constitucional, logrando así dar respuesta al problema jurídico identificado sin utilizar a la recopilación de datos de campo ni a métodos cuantitativos.

## 2.1. **Enfoque y método de análisis jurisprudencial**

Para justificar este tipo de análisis de línea jurisprudencial con la rigurosidad epistemológica característica de la especialización en Derecho Constitucional, el apartado de elaboración del Enfoque y Método de Análisis Jurisprudencial debe trazarse bajo la tipología hermenéutica y constructivista del derecho.

Asimismo, se toma en cuenta los límites de lo que puede incluir un método todo de investigación, precisamente al acoplarlo a un enfoque de tipo dogmático - jurídico y eludir la recogida de datos empíricos del campo o de las mediciones de tipo cuantitativo, para centrarse en el modo de la comprensión, interpretación y matización del sistema del sentido normativo de los textos jurisprudenciales. De este modo se puede llevar a cabo el estudio del derecho no como un conjunto fijo de normas positivizadas, sino como un ordenamiento dinámico que resulta de cara a la interpretación judicial de los principios constitucionales y convencionales. Y para ello se recurre a una perspectiva hermenéutica para poder mirar a los pronunciamientos de las altas cortes como discursos jurídicos vinculantes y creadores de derecho, pero que buscan dar cumplimiento a la justicia sustantiva de cara a las formas procesales.

Se utilizará el método de análisis de líneas jurisprudenciales como eje operativo para el examen del corpus jurisprudencial, basado en la propuesta metodológica de análisis constitucional de precedentes, el cual se implementará en tres etapas sucesivas:

- La localización del nicho situacional y de las sentencias hito, a partir de un punto de apoyo

arquimédico para la búsqueda de las providencias de unificación (SU), y de casación que marcaron el debate.

- La línea de tiempo, que permite ubicar gráficamente las decisiones sobre un eje de soluciones jurídicas que varían entre el formalismo procesal y el garantismo constitucional.
- La aplicación de la técnica de análisis de precedentes, orientada a desarticular la estructura interna de las sentencias seleccionadas de manera que se pueda separar los argumentos incidentalmente producidos (*obiter dicta*) de la regla jurídica vinculante y determinante del fallo (*ratio decidendi*).

Finalmente, el análisis jurisprudencial se potencializará por el uso del método dialéctico y comparado que se considera como imprescindible para poder tener un vistazo del escenario de superación de la oposición del caso “choque de trenes”. Este método nos permitirá contrastar las transformaciones de la argumentación de la Corte Constitucional entre 1997 y 2025. De tal manera que el estudio de la jurisprudencia no se hará en islas de interpretaciones separadas, sino que se volverá un proceso de conversación judicial compleja, donde el giro de la *ratio decidendi* de una corporación invita a una reestructuración dogmática y adaptativa de la corporación respecto del tema de salud.

## 2.2. Instrumentos y técnicas utilizadas

La recolección, procesamiento y análisis del corpus jurisprudencial del presente análisis de línea jurisprudencia; se llevará a cabo bajo las técnicas e instrumentos que ofrece la investigación dogmática, así como también las de la hermenéutica jurídica. Como técnica fundamental se utiliza el análisis documental especializado, que se aplica sistemática y selectivamente sobre las fuentes primarias de información judicial, que para nuestro caso se limitan a los textos oficiales de las Sentencias de Unificación (SU) de la Corte Constitucional indexados en las relatorías oficiales de

esta corporación. Esta técnica ofrece una deconstrucción analítica de las providencias para revisar la coherencia interna de sus argumentos, el movimiento de sus premisas y el punto de despegue de la fundamentación del control de convencionalidad abierto en el lapso comprendido.

De ahí que, la técnica de operación para la extracción de datos se funde, conceptualmente, en el fichaje jurisprudencial basado en el modelo de análisis de precedentes que se ha formalizado. Esta técnica va a permitir la segmentación mecánica de cada fallo, para, posteriormente, poder analizar por separado sus partes fundamentales de la providencia dictada: los hechos constitucionalmente relevantes, las pretensiones de los actores, los problemas jurídicos de constitucionalidad o convencionalidad que la Sala trató, las subreglas que integran la fuerza vinculante de la decisión.

### 3. Desarrollo de investigación

#### 3.1. Cuadro inicial de fichas jurisprudenciales

##### *Ficha Jurisprudencial No 01– Sentencia SU-645 de 1997*

|                        |                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magistrado Ponente     | Dr. Fabio Morón Díaz.                                                                                                                 |
| Órgano que resuelve    | Sala Plena de la Corte Constitucional.                                                                                                |
| Radicado               | Expediente T-140739.                                                                                                                  |
| Accionantes            | Luis Fernando Zuluaga Laserna y<br>Constanza Augusta Laserna.                                                                         |
| Accionado              | Clínica Palermo de Santafé de Bogotá.                                                                                                 |
| Tema principal         | Procedencia excepcional de la tutela para proteger la vida y la salud frente a un particular prestador del servicio público de salud. |
| Tema complementario    | Principio de solidaridad, perjuicio irremediable y tutela contra particulares.                                                        |
| Normas aplicadas       | Arts. 1, 11, 48, 49, 86 y 241-9 CP; arts. 8, 36 y 42 del Decreto 2591 de 1991.                                                        |
| Derechos fundamentales | Vida, salud en conexidad con la vida y dignidad humana.                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hechos sintetizados     | El actor contrajo VIH por una transfusión de sangre. La clínica negó la atención mientras se resolvía el proceso ordinario.                                                                          |
| Fundamento de la tutela | Pidió atención médica urgente como una medida temporal para prevenir un daño irreversible.                                                                                                           |
| Primera instancia       | Negó la acción Constitucional por existir otro medio judicial.                                                                                                                                       |
| Segunda instancia       | Revocó y concedió la tutela como mecanismo transitorio.                                                                                                                                              |
| Ratio decidendi         | La tutela procede excepcionalmente cuando el proceso ordinario no protege oportunamente la vida; el principio de solidaridad obliga a prestar atención médica mientras se define la responsabilidad. |
| Criterios de precedente | La tutela no sustituye procesos ordinarios; procede transitoriamente ante perjuicio irremediable; procede contra particulares que prestan servicios públicos; prevalece la protección de la vida.    |
| Decisión definitiva     | La Corte confirmó el fallo de segunda instancia.                                                                                                                                                     |

**Ficha Jurisprudencial No 02 – Sentencia SU-039 de 1998**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magistrado Ponente      | Dr. Hernando Herrera Vergara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Órgano que resuelve     | Sala Plena de la Corte Constitucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Radicado                | Ver sentencia SU-039 de 1998.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Accionante              | Según expediente de la sentencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tema principal          | Derecho a la seguridad social y protección mediante acción de tutela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tema complementario     | Servicio público de seguridad social, solidaridad y protección reforzada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normas aplicadas        | Arts. 48, 49, 86 y concordantes de la Constitución; Decreto 2591 de 1991.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Derechos fundamentales  | Seguridad social, salud y vida digna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hechos sintetizados     | La demandante, afiliada al Plan Magenta de Salud COLMENA, presentó una acción de tutela tras la negativa de hospitalización por parte de la entidad debido a enfermedades preexistentes, como la artritis reumatoidea. A pesar de haber recibido atención en ocasiones anteriores, COLMENA argumentó que las dolencias recientes eran consecuencia de condiciones excluidas del contrato. La actora alegó la falta de un análisis adecuado de su condición médica y una investigación insuficiente sobre las causas de su derrame pleural, lo que limitó su acceso a servicios médicos necesarios. Esta situación deterioró su salud significativamente |
| Fundamento de la tutela | Se alegó vulneración de derechos fundamentales por negativa o deficiente prestación del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Primera instancia       | Reseñada en la sentencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Segunda instancia       | Reseñada en la sentencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ratio decidendi         | La seguridad social adquiere protección constitucional inmediata cuando su afectación compromete varios derechos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterios de precedente | Origen extraordinario de la protección para salvaguardar derechos fundamentales relacionados con la seguridad social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Decisión definitiva     | La resolución del Juzgado 15 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, emitida el 27 de junio de 1997, fue confirmada en relación a la tutela otorgada a Ana Victoria García de Bernal. Se asegura su derecho a la salud, integridad personal, vida y seguridad social, así como a la protección y asistencia para los ancianos, instruyendo a Salud COLMENA - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD para que proporcione los tratamientos y servicios médicos necesarios para su recuperación. |

***Ficha Jurisprudencial No 03 Sentencia SU-819 de 1999***

|                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ítem                             | Análisis                                                                                                         |
| Magistrado Ponente               | Dr. Álvaro Tafur Galvis.                                                                                         |
| Órgano que resuelve              | Sala Plena de la Corte Constitucional.                                                                           |
| Radicado                         | Expediente T-217495.                                                                                             |
| Accionante                       | Alejandro Moreno Álvarez, en representación de su hijo menor.                                                    |
| Accionado                        | Ministerio de Salud y Colmena Salud EPS.                                                                         |
| Tema principal                   | Protección del derecho a la salud frente a tratamientos excluidos del POS indispensables para preservar la vida. |
| Tema complementario              | Solidaridad, recobro al FOSYGA, protección reforzada de los menores.                                             |
| Normas aplicadas e interpretadas | Arts. 1, 2, 11, 13, 44, 48, 49, 86 y 95 CP; Ley 100 de 1993 y normas del POS.                                    |
| Derechos fundamentales           | Vida, salud, dignidad humana, igualdad y seguridad social.                                                       |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hechos sintetizados | El niño fue diagnosticado con leucemia mieloide crónica. Los médicos solicitaron un trasplante de médula ósea heterólogo con donante no relacionado, un procedimiento que no está incluido en el POS y no se encuentra disponible en Colombia. La EPS rechazó hacerse cargo completamente del tratamiento debido a su exclusión del plan de beneficios. El padre solicitó tutela al considerar que la negativa ponía en grave riesgo la vida y la salud de su hijo, debido a la única opción de tratamiento. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fundamentos de la tutela      | Solicitó ordenar el tratamiento integral por ser indispensable para proteger la vida del menor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Decisión de primera instancia | Concedió la tutela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Decisión de segunda instancia | Revisada por la Corte Constitucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Problema jurídico             | ¿Puede negarse un tratamiento excluido del POS cuando constituye la única alternativa para proteger la vida de un menor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ratio decidendi               | La Corte enfatizó que las exclusiones del POS no tienen prioridad sobre la efectiva protección de los derechos fundamentales. Cuando un procedimiento ha sido indicado por el médico, es esencial para prevenir la muerte o un grave deterioro en la salud, no hay alternativa adecuada y el paciente no tiene recursos económicos, la EPS está obligada a proporcionarlo. La sostenibilidad financiera del sistema se resguarda a través del recobro al FOSYGA y no pasando el peligro para el paciente. |

|                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regla jurisprudencial | La EPS debe autorizar servicios excluidos del POS cuando sean indispensables para proteger la vida y la salud en las condiciones fijadas por la Corte. |
| Subreglas             | La salud adquiere carácter fundamental por conexidad; los menores reciben protección reforzada; el recobro procede frente a servicios no cubiertos.    |

|                                        |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterios de aplicación del precedente | Aplicable cuando existe orden del médico tratante, riesgo para la vida, ausencia de alternativa eficaz y falta de recursos del paciente. |
| Decisión definitiva                    | La Corte confirmó la protección y ordenó garantizar el tratamiento integral con posibilidad de recobro.                                  |
| Salvamentos y aclaraciones de voto     | No se registran en la sentencia.                                                                                                         |

***Ficha jurisprudencial No 04. Sentencia SU-1554 de 2000.***

| Ítem                               | Análisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magistrada Ponente (e)             | Dra. Cristina Pardo Schlesinger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Órgano que resuelve                | Sala Plena de la Corte Constitucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Radicado                           | Expediente T-324.346.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Accionante                         | Mario González Mejía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Accionado                          | Colsánitas S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tema principal                     | Protección del derecho a la salud en los contratos de medicina prepagada y límites a la alegación de preexistencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tema complementario                | Buena fe contractual, continuidad del servicio de salud y confianza legítima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Normas aplicadas e interpretadas   | Artículos 11, 48, 49, 83 y 86 de la Constitución Política; Decreto 2591 de 1991; régimen jurídico de la medicina prepagada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Derechos fundamentales reconocidos | Vida, salud, dignidad humana, integridad personal y buena fe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hechos sintetizados                | El señor Mario González Mejía era usuario de un contrato de medicina prepagada con Colsánitas. Después de requerir un tratamiento médico, la entidad negó su cobertura argumentando que la enfermedad constituía una preexistencia. Sin embargo, al momento de la afiliación no practicó examen médico ni dejó consignada expresamente dicha exclusión. El accionante promovió acción de tutela al considerar que la negativa ponía en riesgo sus derechos fundamentales y desconocía las condiciones inicialmente pactadas. |

|                               |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fundamentos de la tutela      | Solicitó ordenar la prestación integral del servicio médico, al estimar que la exclusión era arbitraria y vulneraba sus derechos fundamentales. |
| Decisión de primera instancia | El Juzgado 15 Penal del Circuito de Cali negó el amparo por considerar que existían mecanismos judiciales ordinarios.                           |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decisión de segunda instancia | El asunto fue seleccionado para revisión por la Corte Constitucional, que unificó la jurisprudencia sobre preexistencias en medicina prepagada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Problema jurídico             | ¿Vulnera una empresa de medicina prepagada los derechos fundamentales al negar un tratamiento alegando una preexistencia que no fue identificada mediante examen de ingreso ni pactada expresamente al celebrar el contrato?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ratio decidendi               | La Corte estableció que las entidades de medicina prepagada tienen la carga de identificar las enfermedades preexistentes al inicio de la relación contractual mediante examen médico o estipulación expresa. Si incumplen ese deber, no pueden modificar posteriormente el contrato para excluir la cobertura de una enfermedad alegando una preexistencia. Tal conducta desconoce los principios de buena fe y confianza legítima y puede comprometer los derechos fundamentales a la vida y a la salud. En consecuencia, cuando la negativa del servicio pone en riesgo dichos derechos, la tutela procede para ordenar la prestación del tratamiento conforme al contrato originalmente celebrado. |
| Regla jurisprudencial         | No es constitucionalmente admisible negar un servicio médico por una preexistencia que no fue determinada al momento de la afiliación ni consignada expresamente en el contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subreglas                              | <p>La carga de establecer las preexistencias corresponde a la empresa.</p> <p>Las exclusiones deben ser claras y expresas.</p> <p>3. No pueden imponerse exclusiones unilaterales durante la ejecución del contrato.</p> <p>4. Debe prevalecer la protección de los derechos fundamentales del usuario.</p> |
| Criterios de aplicación del precedente | Aplica cuando una entidad de medicina prepagada pretende negar un tratamiento                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | por una supuesta preexistencia no determinada al inicio del contrato y ello afecta la vida o la salud del usuario.                                                                                                                                                                                          |
| Decisión definitiva                    | La Corte concedió el amparo y ordenó a Colsánitas garantizar la prestación de los servicios médicos requeridos conforme al contrato.                                                                                                                                                                        |
| Salvamentos y aclaraciones de voto     | La sentencia contiene aclaraciones y salvamentos parciales de voto.                                                                                                                                                                                                                                         |

***Ficha jurisprudencial No 05. Sentencia SU-1023 de 2001***

|                      |                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magistrados Ponentes | Jaime Córdoba Triviño                                                                                                                                                |
| Órgano que resuelve  | Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia                                                                                                                    |
| Radicado             | Expedientes acumulados T-409301, T-411010, T-411263, T-442235 y T-426970.                                                                                            |
| Accionante           | Librada de Dios y otros                                                                                                                                              |
| Tema principal       | Derecho a la seguridad social y pago oportuno de las mesadas pensionales de personas de la tercera edad en empresas sometidas a procesos de liquidación obligatoria. |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tema complementario                | <p>Derecho al mínimo vital del jubilado y suposiciones sobre su impacto por falta prolongada en el abono de pensiones.</p> <p>Principio de igualdad y participación proporcional de activos en la liquidación de empresas.</p> <p>Presunción de responsabilidad supletoria de la empresa matriz o controladora (parágrafo del art. 148 de la norma 222 de 1995). Impactos inter comunis en la acción de tutela.</p> <p>Límites y requisitos de la agencia oficiosa en materia de tutela.</p> |
| Normas aplicadas e interpretadas   | <p>Normas aplicadas e interpretadas: Artículos 1º, 4º, 5º, 11, 29, 86, 116 y 241-9 de la Constitución Política; artículo 36 de la Ley 50 de 1990; Ley 222 de 1995 (artículos 27, 98, 148, 157, 166 y 167); y el Decreto 2591 de 1991 (artículo 10).</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Derechos fundamentales reconocidos | <p>Protección social, ingreso mínimo, existencia en condiciones apropiadas, equidad, atención especial a los ancianos y proceso legal adecuado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hechos sintetizados           | <p>Un grupo de pensionados de la CIFM (empresa en liquidación obligatoria desde el 31 de julio de 2000) interpuso acciones de tutela debido a que la empresa suspendió el pago de sus mesadas pensionales y aportes a salud desde septiembre de 1999. Esto desencadenó una avalancha de tutelas y desacatos en todo el país. Paralelamente, el liquidador de la compañía (Fidupetrol) interpuso otra tutela actuando como supuesto "agente oficioso" de la totalidad de los 772 pensionados. En ella solicitaba suspender los efectos de los fallos de tutela que ordenaban pagos preferentes a los jubilados individualmente tutelantes por considerar que rompían la igualdad, y pretendía que el Ministerio de Hacienda y la Federación Nacional de Cafeteros (como matriz controlante con recursos del Fondo Nacional del Café) asumieran obligatoriamente el pago del pasivo pensional.</p> |
| Fundamentos de la tutela      | <p>Los accionantes particulares alegaron que el no pago prolongado de sus mesadas pensionales afectaba directamente su mínimo vital y su salud, tratándose en su mayoría de personas de la tercera edad que dependían exclusivamente de esos ingresos y se encontraban desprotegidos por el cese de los aportes médicos. Por su parte, el liquidador alegó la vulneración del derecho a la igualdad de la masa de pensionados no tutelantes y la configuración de "vías de hecho" por parte de los jueces que ordenaban pagos por fuera del proceso concursal de liquidación de la Ley 222 de 1995.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Decisión de primera instancia | <p>Los diferentes juzgados municipales y laborales de circuito que conocieron las</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>tutelas de los pensionados particulares las negaron en su momento, argumentando la existencia de otros medios de defensa judicial (el proceso concursal liquidatorio) o la falta de demostración de un perjuicio irremediable. Asimismo, los tribunales y la Corte Suprema de Justicia negaron la tutela interpuesta por el liquidador, considerándola improcedente por buscar declarar una responsabilidad puramente legal y de competencia ordinaria o contenciosa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ratio decidendi          | <p>La Corte Constitucional determinó que la acción de tutela es procedente de forma excepcional y transitoria para reclamar el pago de mesadas pensionales cuando está de por medio el mínimo vital y la subsistencia digna de sujetos de especial protección (tercera edad), ya que los medios ordinarios pierden eficacia ante la urgencia de la situación. Cuando una empresa en liquidación carece de caja inmediata para cubrir créditos de primer orden y existe una matriz controlante, opera una presunción legal (<i>iuris tantum</i>) de responsabilidad subsidiaria de esta última (art. 148 de la Ley 222 de 1995).</p> <p>Por ende, el juez constitucional puede ordenar de manera transitoria que la matriz provea la liquidez necesaria para salvaguardar los derechos fundamentales de los pensionados mientras la justicia ordinaria decide de fondo.</p> <p>Adicionalmente, se determinó que un liquidador de una empresa no está legitimado para actuar como agente oficioso de todos los pensionados si no demuestra la imposibilidad de estos para defenderse individualmente y si no media ratificación.</p> |
| Criterios de unificación | <p>La Corte unificó los efectos de la sentencia otorgándoles carácter <i>inter comunis</i>. Estableció que cuando la protección de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>los derechos de los tutelantes individuales impacta directamente en los recursos comunes e insuficientes de una empresa en liquidación, generando tratos desiguales frente a quienes no acudieron a la tutela, la orden de amparo debe extenderse con igualdad de participación a toda la comunidad de pensionados (en este caso, a los 772 jubilados de la CIFM), estén o no incluidos formalmente en los autos del proceso liquidatorio actual.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Decisión definitiva                | <p>La Corte Constitucional revocó los fallos de instancia que habían negado el amparo a los pensionados. Concedió de manera transitoria la tutela a la totalidad de los pensionados de la CIFM (efectos inter comunis) y ordenó a la Federación Nacional de Cafeteros que, con cargo a sus recursos o a los del Fondo Nacional del Café, ponga a disposición del liquidador los dineros faltantes para pagar de forma oportuna las mesadas causadas a partir del 1° de junio de 2001 y los aportes pendientes de salud, hasta que la justicia ordinaria defina la responsabilidad definitiva. Los pensionados quedaron con un plazo de cuatro meses para instaurar las acciones judiciales ordinarias de fondo. De otra parte, confirmó la improcedencia de la tutela interpuesta por el liquidador en calidad de agente oficioso.</p> |
| Salvamentos y aclaraciones de voto | <p>El extracto provisto de la providencia no especifica si se presentaron salvamentos o aclaraciones de voto al cierre del texto. (Nota: El encabezado provisto menciona por error en la plantilla la Sentencia SU-466 de 2025, pero el texto íntegro aportado corresponde materialmente a la Sentencia SU-1023 de 2001, sobre la cual se ejecutó este análisis).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Ficha jurisprudencial No 06. Sentencia SU-508 de 2020**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magistrados Ponentes             | Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Órgano que resuelve              | Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Radicado                         | Expedientes T-4681096, T-4682705, T-4682892, T-4683196, T-4693923, T-4705053, T-4708213, T-4782455, T-4783590, T-4786090, T-4791082, T-4791687, T-4796573, T-4831732, T-4831896, T-4832661, T-4835720, T-4847464, T-4848232, T-4852012, T-4852755, T-4883565, T-4886606, T-4886606, T-4893416, T-4900966, T-4901031, T-4918485, T-4925320, T-4926429, T-4930312 (Acumulados). |
| Accionado                        | Varios accionantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tema principal                   | Procedibilidad de la acción de tutela frente al mecanismo jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud (Principio de Subsidiariedad) y el acceso a tecnologías, insumos y servicios excluidos o implícitamente incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).                                                                                                  |
| Tema complementario              | Procedibilidad de la acción de tutela ante el mecanismo jurisdiccional de la Carencia actual de objeto (hecho superado y situación sobreviniente por fallecimiento), derecho al diagnóstico, principio de integralidad en salud, y límites del principio de solidaridad familiar ante la carga del cuidado.                                                                   |
| Normas aplicadas e interpretadas | Artículos 2, 49, 86 y 241 (numeral 9) de la Constitución Política de Colombia; Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015); Ley 1122 de 2007 (artículo 41); Ley 1949 de 2019; Decreto 2591 de 1991 (artículos 10, 24, 29)                                                                                                                                                     |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Derechos fundamentales reconocidos | Derecho fundamental a la salud, a la vida digna, a la integridad física y el derecho al diagnóstico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hechos sintetizados                | Se acumulan 30 acciones de tutela interpuestas (en su mayoría por agentes oficiosos) a favor de personas en condiciones graves de salud, enfermedades crónicas o congénitas que les impiden valerse por sí mismas. Los accionantes solicitaban insumos y servicios como pañales, pañitos húmedos, cremas anti-escaras, sillas de ruedas, servicio de cuidador, transporte intermunicipal o enfermería domiciliaria. Las EPS negaron estos servicios argumentando la falta de fórmulas médicas adscritas a su red, que no estaban contemplados en el antiguo POS, o por la ausencia de solicitudes formales previas |
| Fundamentos de la tutela           | Se acumulan 30 acciones de tutela interpuestas (en su mayoría por agentes oficiosos) a los accionantes argumentan la vulneración de sus derechos al no poder costear de manera particular estos insumos indispensables para una vida en condiciones dignas, dada su precaria situación socioeconómica y su alto estado de vulnerabilidad (siendo muchos de ellos niños o adultos mayores).                                                                                                                                                                                                                         |
| Decisión de primera instancia      | Las decisiones de los jueces de instancia fueron disímiles: algunos declararon improcedentes las tutelas por falta de prescripción médica o por no agotarse la solicitud formal ante la EPS; otros las negaron por estar los insumos por fuera del POS; y excepcionalmente, algunos juzgados ampararon el derecho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ratio decidendi                    | El proceso jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud no es un mecanismo efectivo ni adecuado de manera automática a causa de lagunas normativas. (como la falta de términos en la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>segunda instancia) y a deficiencias estructurales de capacidad logística y retrasos masivos (de hasta 2 o 3 años para fallar), por lo que la tutela es el medio principal y adecuado.</p> <p>El procedimiento jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud no es un mecanismo idóneo ni eficaz de forma automática debido a vacíos normativos (como la falta de términos en la segunda instancia) y a deficiencias estructurales de capacidad logística y retrasos masivos (de hasta 2 o 3 años para fallar), por lo que la tutela es el medio principal y adecuado.</p> <p>2. Plan de Beneficios: Con la Ley 1751 de 2015 el sistema cambió: todo lo que no esté taxativamente excluido del PBS se entiende incluido. Insumos como pañales, cremas anti-escaras, sillas de ruedas y sondas están implícitamente incluidos.</p> <p>3. Cuando no hay orden médica, si la necesidad es un hecho notorio, el juez debe ordenar el suministro condicionado a la ratificación del médico; si hay dudas, debe ordenar a la EPS realizar el diagnóstico oportuno.</p> <p>4. El deber de la familia de cuidar al paciente encuentra un límite en su propia capacidad económica y en sus proyectos de vida; el Estado no puede imponer cargas desproporcionadas basándose en estereotipos.</p> |
| Criterios de unificación | <p>La Corte unifica que el juez de tutela no puede declarar la improcedencia automática por la existencia del mecanismo de la Superintendencia de Salud. Asimismo, establece subreglas específicas para el acceso a insumos (pañales, cremas, sillas de ruedas), transporte intermunicipal (que no requiere fórmula médica y es cubierto por el sistema) y enfermería domiciliaria (que no sustituye al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | cuidador y aplica para enfermedades terminales o crónicas degenerativas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Decisión definitiva                | <p>1. Declarar la falta actual de objeto por evento sobrevenido (deceso) en 20 de los casos acumulados.</p> <p>1.2 Declarar la falta actual de objeto por hecho consumado en 5 de los casos, ya que las EPS comenzaron a ofrecer los servicios de manera voluntaria durante el proceso. Conceder el amparo y realizar el estudio de fondo en los casos que continuaban activos (como los expedientes T-4.681.096, T-4.683.196, T-4.852.012, T-4.926.429 y T-4.930.312), ordenando el suministro de los servicios requeridos.</p> |
| Salvamentos y aclaraciones de voto | (No se pormenorizan discusiones de salvamentos específicos dentro del extracto del texto aportado, concentrándose la decisión en la unanimidad de la unificación adoptada por la Sala Plena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

***Ficha jurisprudencial No 07 Sentencia SU-109 de 2022***

|                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magistrados Ponentes | Paola Andrea Menesas Mosquera                                                                                                                                                                                                                |
| Órgano que resuelve  | Corte Constitucional de Colombia (Sala Plena).                                                                                                                                                                                               |
| Radicado             | Expedientes acumulados T-7.953.574, T-8.023.514 y T-8.062.133                                                                                                                                                                                |
| Accionado            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricardo Hernández León.</li> <li>- Rudolf Hommes y otros.</li> <li>- Dolcecy Casas Rodríguez</li> </ul>                                                                                             |
| Tema principal       | Violación de los derechos de las personas mayores de 70 años a causa de las normativas sanitarias de aislamiento preventivo obligatorio especial y limitaciones de movilidad física más estrictas impuestas durante la pandemia de COVID-19. |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tema complementario                | Límites al paternalismo estatal frente a sujetos de especial protección constitucional, la autonomía personal, la aplicación del test de igualdad cuando se utiliza la edad como restricción y la configuración de la carencia actual de objeto.                                                                                                                                      |
| Normas aplicadas e interpretadas   | Artículos 1, 13, 16, 24, 25 y 46 de la Constitución Política de Colombia; Decretos y Resoluciones del Gobierno Nacional (MinSalud y MinInterior) emitidos durante el año 2020 para la gestión de la emergencia sanitaria.                                                                                                                                                             |
| Derechos fundamentales reconocidos | Igualdad (en su faceta de no discriminación), Libertad de Locomoción, Libre Desarrollo de la Personalidad y Trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hechos sintetizados                | En el marco de la emergencia por COVID-19, el Gobierno colombiano impuso restricciones de movilidad y confinamiento residencial mucho más estrictas y prolongadas a los adultos mayores de 70 años en comparación con los demás adultos bajo el argumento de                                                                                                                          |
|                                    | proteger su salud. Diversos ciudadanos de este grupo etario (un escritor activo de 80 años, un colectivo de 25 personas liderado por Rudolf Hommes y un ingeniero independiente de 77 años) interpusieron tutelas por separado señalando que el confinamiento obligatorio vulneraba sus derechos, los "infantilizaba", afectaba su salud mental y destruía su mínimo vital económico. |
| Fundamentos de la tutela           | Los accionantes alegaron que fijar el confinamiento basándose únicamente en la edad cronológica constituía una medida discriminatoria y desproporcionada que anulaba su autonomía individual, asumiéndolos como personas incapaces de autodeterminarse y tomar sus propias medidas de autocuidado.                                                                                    |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decisión de primera instancia | Los fallos variaron según cada expediente: en el caso de Ricardo Hernández y Dolcey Casas se negó el amparo al considerar que la restricción buscaba un fin legítimo (proteger la vida y salud colectiva). En el caso del grupo liderado por Rudolf Hommes, el Juzgado 61 Administrativo de Bogotá concedió el amparo tras aplicar un test intermedio de igualdad, determinando que la medida era desproporcionada.                                                                                                                                                                                                       |
| Ratio decidendi               | La Corte determinó que utilizar la edad cronológica como el único factor para segregar a un sector de la población e imponerle un confinamiento más gravoso no es constitucionalmente justificado ni necesario. Si bien el Estado buscaba proteger a un grupo vulnerable, las medidas paternalistas no pueden anular la dignidad y la autonomía de los sujetos de especial protección, por lo que el trato diferenciado se tradujo en una discriminación que violó directamente sus libertades fundamentales                                                                                                              |
| Criterios de unificación      | <p>La Sala Plena unificó las siguientes reglas jurisprudenciales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Cuando las normas usan la edad para fijar un parámetro mínimo, se aplica un test de igualdad de intensidad débil o leve.</li> <li>. Cuando la edad se usa para imponer un tope máximo o una restricción, se considera un criterio semisospechoso, obligando a aplicar un test de igualdad de intensidad intermedia.</li> <li>. Se ratificó la obligación de todos los jueces de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante normas generales abiertamente contrarias a la Carta Política.</li> </ul> |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decisión definitiva                | La Corte Constitucional declaró la carencia actual de objeto por daño consumado / situación sobreviniente debido a que las medidas sanitarias ya habían perdido vigencia. No obstante, se pronunció de fondo para proteger la dimensión objetiva de los derechos y determinar que las autoridades accionadas sí vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad, libertad de locomoción y al trabajo de los accionantes. |
| Salvamentos y aclaraciones de voto | (No se detallan votos disidentes específicos en el extracto del texto suministrado, indicando que fue una decisión adoptada por la Sala Plena de la corporación).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

***Ficha jurisprudencial No 08. Sentencia SU-239 de 2024***

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magistrados Ponentes | José Fernando Reyes Cuartas.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Órgano que resuelve  | Sala Plena de la Corte Constitucional.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Radicado             | Expedientes Acumulados T-4.681.096, T-4.682.705, T-4.682.892 y otros (30 expedientes acumulados en total bajo el radicado principal T-4.681.096 AC).                                                                                                                                   |
| Accionado            | Juana Nelly Rodríguez (T-4.681.096), Harold Villamarín Vargas (agente oficioso de Alcira Urueña de Maya), Olga María Dinás Romero (agente de José Aldemar Romero), Mariela Fori Páez (agente de Miguel Ángel Larrahondo) y 26 personas más detalladas en el expediente de unificación. |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tema principal      | Aseguramiento del derecho esencial a la salud en relación con el acceso a servicios, suministros y tecnologías sanitarias que son necesarios. Definición del nuevo esquema de atención del Plan de Beneficios en Salud (PBS) desde la entrada en vigor de la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015), basado en la norma de exclusiones claras e inclusiones tácitas.                                                                                       |
| Tema complementario | Límites y alcance del principio de subsidiariedad en la acción de tutela frente a las competencias jurisdiccionales de la Superintendencia Nacional de Salud. Establecimiento de la falta presente de objeto debido a las razones normativas de hecho, superación y circunstancia sobrevenida (muerte del paciente o asunción externa de la responsabilidad). Fundamento de la solidaridad familiar y sus restricciones financieras y de planificación de vida. |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Alcance y fases del derecho al diagnóstico (identificación, valoración y prescripción) en ausencia de fórmulas médicas de profesionales adscritos.                                                                                                                                                                                                                 |
| Normas aplicadas e interpretadas   | Artículos 2, 48, 49, 86 y 241 (numeral 9) de la Constitución Política de Colombia. Artículos 5, 6, 10, 14 y 15 de la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015). Artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 (modificado por la Ley 1949 de 2019) relativo a funciones de la Superintendencia Nacional de Salud. Decreto 2591 de 1991 (Regulación de la Acción de Tutela). |
| Derechos fundamentales reconocidos | Derecho fundamental autónomo a la salud (en sus facetas de accesibilidad, integralidad y diagnóstico oportuno), en conexidad intrínseca con los derechos a la vida digna, a la integridad personal y al mínimo vital de sujetos de especial protección constitucional.                                                                                             |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hechos sintetizados | <p>La Sala Plena de la Corte Constitucional efectúa la revisión acumulada de treinta (30) acciones de tutela instauradas en favor de personas que padecen patologías congénitas, degenerativas, crónicas o secuelas graves de accidentes que les impiden valerse por sí mismas. Debido a su condición de vulnerabilidad y pérdida de autonomía funcional, los pacientes requieren con necesidad el suministro constante de insumos y tecnologías médicas (tales como pañales desechables, cremas antiescaras, sillas de ruedas, guantes y servicio de enfermería domiciliaria). Las respectivas Entidades Promotoras de Salud (EPS) negaron sistemáticamente la entrega de estos elementos amparándose en barreras de carácter administrativo, en la falta de inclusión en el antiguo Plan Obligatorio de Salud</p> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | (POS), o en la ausencia de una prescripción emitida por un médico adscrito a su red prestadora de servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fundamentos de la tutela | <p>Los accionantes alegaron que las EPS vulneraron sus derechos fundamentales al negar el acceso a los insumos médicos necesarios para garantizar una vida en condiciones dignas. Sostuvieron que las entidades antepusieron trámites administrativos y regulaciones de cobertura financiera por encima del principio de integridad del servicio de salud. Adicionalmente, argumentaron que obligar a personas de la tercera edad o en situación de extrema discapacidad física y económica a sufragar tecnologías de alto costo recurrente constituye un desconocimiento directo del principio de progresividad del sistema de seguridad social y de los deberes de protección estatal frente a poblaciones vulnerables.</p> |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decisión de primera instancia | <p>Las sentencias de instancia adoptaron posturas diversas: en varios expedientes se denegó el amparo constitucional tras declarar la improcedencia de la tutela por el no agotamiento del mecanismo jurisdiccional principal ante la Superintendencia Nacional de Salud (principio de subsidiariedad). En otros casos, los jueces negaron las pretensiones bajo el argumento de que los insumos requeridos no contaban con la orden expresa del médico tratante adscrito o se encontraban excluidos de la cobertura del plan general de beneficios financiado con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).</p> |
| Problema jurídico             | <p>La Corte fija subreglas obligatorias de unificación para la inaplicación excepcional de exclusiones expresas. En el escenario post-Ley 1751 de 2015, el juez de tutela debe verificar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                               | <p>concurrentemente: 1) Que la ausencia de la tecnología amenace o vulnere los derechos a la vida o integridad física de forma clara y cualificada; 2) Que no exista en el PBS otro sustituto con igual efectividad; 3) Que el paciente carezca de capacidad económica para sufragarlo según la sana crítica; y 4) Que exista prescripción de un médico adscrito, o en su defecto, indicios manifiestos de necesidad que activen el derecho al diagnóstico transitorio.</p>                                                                                                                                            |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ratio decidendi     | <p>La Sala Plena establece que tras la expedición de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 se generó un cambio de paradigma: el régimen de salud migró de un modelo restrictivo (donde solo se cubría lo expresamente incluido) a un modelo de inclusión implícita, donde todo aquello que no esté taxativamente excluido se entiende plenamente incorporado al PBS. En consecuencia, insumos como pañales, sillas de ruedas o cremas protectoras están integrados y su negativa injustificada es inconstitucional. Respecto a la Superintendencia de Salud, la Corte determinó que dicho mecanismo padece vacíos normativos y un retraso estructural insostenible (de 2 a 3 años), por lo cual carece de idoneidad y eficacia inmediata, legitimando la procedencia directa de la acción de tutela. Adicionalmente, el tribunal precisó que, ante la ausencia de orden médica, el juez no debe negar la protección, sino tutelar el derecho al diagnóstico en sus etapas de identificación, valoración y prescripción técnica.</p> |
| Decisión definitiva | <p>La Sala Plena resolvió: 1) Unificar los criterios jurisprudenciales en salud. 2) Revocar los fallos de instancia que negaron los amparos o declararon la improcedencia formal. 3) Conceder la protección del derecho fundamental a la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>salud (en la faceta de diagnóstico o acceso efectivo) en los casos activos, ordenando a las EPS remitir a los pacientes a sus médicos tratantes para la inmediata prescripción y entrega de los insumos. 4) Declarar la Carencia</p> <p>Actual de Objeto por Hecho Superado en los eventos donde la EPS suministró voluntariamente lo pretendido, y por Situación Sobrevenida en los casos donde se demostró el fallecimiento del accionante durante el trámite de revisión.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Salvamentos y aclaraciones de voto | <p>Aclaración de la Magistrada Diana Fajardo Rivera: Coincide con la decisión, pero precisa que bajo el nuevo modelo de la Ley Estatutaria el saber médico debe liberarse de barreras administrativas irracionales. Subraya que hoy solo está por fuera del sistema lo taxativamente excluido mediante procesos deliberativos, por lo que negar tecnologías no excluidas es una violación flagrante.</p> <p>Aclaración del Magistrado (e) Richard S. Ramírez Grisales: Resalta que la prueba de la incapacidad económica, analizada bajo las reglas de la sana crítica, es un requisito estricto e insalvable para que el juez de tutela ordene suministros transitorios de tecnologías, fundamentado en los principios constitucionales de solidaridad y sostenibilidad financiera del sistema.</p> <p>Aclaración del Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo: Comparte el amparo al diagnóstico, pero advierte que la reiteración de subreglas de inaplicación anteriores a la Ley 1751 de 2015 ignora la naturaleza del nuevo sistema de exclusiones del artículo 15 y la prohibición legal de financiar con recursos públicos lo expresamente exceptuado.</p> |

**Ficha jurisprudencial NO 09. Sentencia SU-297 de 2025**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magistrados Ponentes               | José Fernando Reyes Cuartas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Órgano que resuelve                | Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Radicado                           | Expedientes Acumulados: T-8.740.768 y T-8.857.733 AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Accionado                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ana, actuando como representante legal de su hija, la niña Iris.</li> <li>- Emma.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tema principal                     | El derecho a la salud sexual y reproductiva de la mujer frente a la autonomía y jurisdicción de los pueblos y comunidades indígenas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tema complementario                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violación del derecho de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por oposición de autoridades ancestrales.</li> <li>- Configuración de la carencia actual de objeto por daño consumado.</li> <li>- Alcance y límites del principio de maximización de la autonomía indígena.</li> </ul>                                                                                                                                  |
| Normas aplicadas e interpretadas   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carta Magna de Colombia: Artículos 1, 2, 13, 15, 16, 18, 42, 43, 44, 49, 246 y 330.</li> <li>- Tratado Interamericano para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia la Mujer (Tratado de Belém do Pará).</li> <li>- Convención para la Erradicación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW).</li> <li>- Ley 691 de 2001 (Sistema de Salud para la Seguridad Social de comunidades indígenas).</li> </ul> |
| Derechos fundamentales reconocidos | Derecho al acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | derecho reproductivo autónomo, derivado de los derechos a la dignidad humana, salud, vida, integridad personal, intimidad, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, no discriminación y protección especial de los niños y niñas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hechos sintetizados      | <p>Caso 1 (Exp. T-8.740.768): Iris, una niña indígena de 12 años, quedó en embarazo, lo cual le provocó una grave afectación psicológica e ideas suicidas. El equipo médico de su E.S.E. determinó que cumplía los requisitos para acceder a la IVE, pero la EPS-I exigió el aval del Resguardo Indígena Blanco. El gobernador de este resguardo se opuso al procedimiento manifestando que en su etnia (Embera Chamí) los menores pueden conformar una familia desde los 12 años. Debido a las demoras y barreras, Iris se vio obligada a continuar con la gestación.</p> <p>Caso No 2 (Exp. T-8.857.733): Emma, una joven universitaria de 25 años del Cabildo Indígena Azul, solicitó la IVE a las 10.6 semanas de gestación debido a un cuadro de depresión, falta de apoyo familiar y afectación a su proyecto vital. Nuevamente la EPS-I pidió autorización a la autoridad tradicional, la cual negó el permiso aduciendo que el embarazo no derivaba de abusos o malformaciones y que el aborto afectaba sus "usos y costumbres". Ante el prolongado trámite judicial, la presión social y el avanzado estado de gestación, Emma desistió de practicarse el procedimiento.</p> |
| Fundamentos de la tutela | Las accionantes argumentaron que las decisiones de sus comunidades indígenas, aunadas a las omisiones de la EPS-I e IPS-I, desconocieron el derecho fundamental a la IVE, su autonomía reproductiva, su salud mental y dignidad humana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Señalaron que el acceso a la IVE es una decisión personalísima y libre que no puede condicionarse a autorizaciones colectivas ni a interpretaciones restrictivas de las causales jurisprudenciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Decisión de primera instancia | En ambos casos, los jueces de única y primera instancia (Juzgado Promiscuo Municipal del Municipio Uno y Juzgado Segundo Penal para Adolescentes del Municipio Dos) negaron el amparo. Consideraron que debía primar la autonomía de los pueblos indígenas, y que las accionantes debían someterse a la legislación, usos y costumbres de sus resguardos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ratio decidendi               | La Corte Constitucional determinó que prohibir a mujeres, jóvenes y niñas indígenas la práctica de la IVE constituye una forma de violencia de género y discriminación étnica. Si bien existe un mandato de maximización de la autonomía indígena, este encuentra un límite absoluto en el "núcleo duro" de los derechos humanos. El derecho a la IVE cuenta con una faceta de defensa que faculta a las personas gestantes a decidir de forma autónoma e incondicionada la interrupción hasta la semana 24 inclusive. Por ende, condicionar u oponerse al procedimiento basándose en los usos y costumbres de un pueblo étnico transgrede directamente la Constitución, el bloque de constitucionalidad y destruye por completo el derecho fundamental de la mujer. |
| Criterios de unificación      | 1. Derecho Mixto de Plazos y Causales: Conforme a la Sentencia C-055 de 2022, el derecho a la IVE es incondicionado y libre hasta la semana 24 de gestación; posterior a este plazo, opera bajo las causales de la Sentencia C-355 de 2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Obligación sin Barreras del Sistema de Salud: Las EPS, IPS e instituciones del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI) tienen la obligación estricta de garantizar de forma inmediata, confidencial y oportuna la IVE, sin usar de excusa el acatamiento de decisiones restrictivas tomadas por cabildos o gobernadores.</li> <li>3. Obligación sin Barreras del Sistema de Salud: Las EPS, IPS e instituciones del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI) tienen la obligación estricta de garantizar de forma inmediata, confidencial y oportuna la IVE, sin usar de excusa el acatamiento de decisiones restrictivas tomadas por cabildos o gobernadores.</li> <li>4. Daño Consumado Temporal: El factor tiempo es crítico en la IVE. Si la barrera administrativa o comunitaria impide realizar el procedimiento dentro de los tiempos médicamente viables y la mujer da a luz en contra de su deseo inicial, se configura una carencia actual de objeto por daño consumado.</li> </ol> |
| Decisión definitiva | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Declarar la configuración de una carencia actual de objeto por daño consumado.</li> <li>2. Ordenar medidas de reparación a cargo de las comunidades indígenas implicadas, instando a iniciar diálogos internos con enfoque de género sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva de sus comuneras.</li> <li>3. Ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social expedir en el</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>plazo máximo de un mes una resolución que reglamente el acceso a la IVE en la red pública de salud para mujeres indígenas en caso de barreras comunitarias, incluyendo mecanismos de reembolso técnico de recursos.</p> <p>4. 4. Exhortar a los jueces de tutela a tramitar de manera prioritaria y con extrema urgencia los casos relacionados con la IVE.</p> |
| Salvamentos y aclaraciones de voto | <p>La sentencia hace mención a la deliberación de la Sala Plena de la Corte Constitucional, indicando la anulación previa de salas de revisión que pretendieron relativizar el derecho a la IVE en territorios étnicos (Autos 2396 y 2397 de 2023), consolidando esta decisión unificada y absoluta de la Sala Plena</p>                                           |

***Ficha jurisprudencial No 10. Sentencia SU-466 de 2025***

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magistrados Ponentes | Lina Marcela Escobar Martínez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Órgano que resuelve  | Sala Plena de la Corte Constitucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Radicado             | Expedientes T-11.081.978, T-11.113.200 y T-10.917.453 (Acumulados)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Accionado            | <p>(i) Gabriela (agente oficiosa de su hijo Julián) contra EPS Compensar.</p> <p>(ii) Victoria (agente oficiosa de su padre Julio) contra EPS Sanitas.</p> <p>(iii) Graciela (representante legal de su hija menor Alexandra) contra Nueva EPS. Nota: Los nombres reales se reservaron bajo reserva de identidad por historias clínicas, usando nombres ficticios para publicación web.</p> |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tema principal                     | Derecho fundamental al cuidado: Unificación de reglas para la protección judicial por vía de tutela, flexibilización de cargas probatorias para su otorgamiento y análisis de la corresponsabilidad social y estatal.                                                                                                                                        |
| Tema complementario                | La financiación y sostenibilidad del servicio de cuidado en el Sistema de Salud, el reconocimiento y profesionalización de las cuidadoras, la diferencia porosa entre el servicio de cuidador y de enfermería, y la protección de los derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad intelectual frente a la esterilización consentida o no. |
| Normas aplicadas e interpretadas   | Artículos 1, 13, 42, 43, 48, 49, 67 y 86 de la Constitución Política de Colombia; Ley 2297 de 2023 (Reconocimiento de Cuidadores); y las subreglas fijadas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y Presupuestos Máximos (MIPRES).                                                                                                                          |
| Derechos fundamentales reconocidos | Derecho fundamental autónomo y justiciable al cuidado (en dimensiones de recibir cuidado, cuidar y autocuidado), íntimamente ligado a la salud, la vida                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | digna, la igualdad de género y la dignidad humana. A la vida digna, a la integridad personal y al mínimo vital de sujetos de especial protección constitucional.                                                                                                                                                                                             |

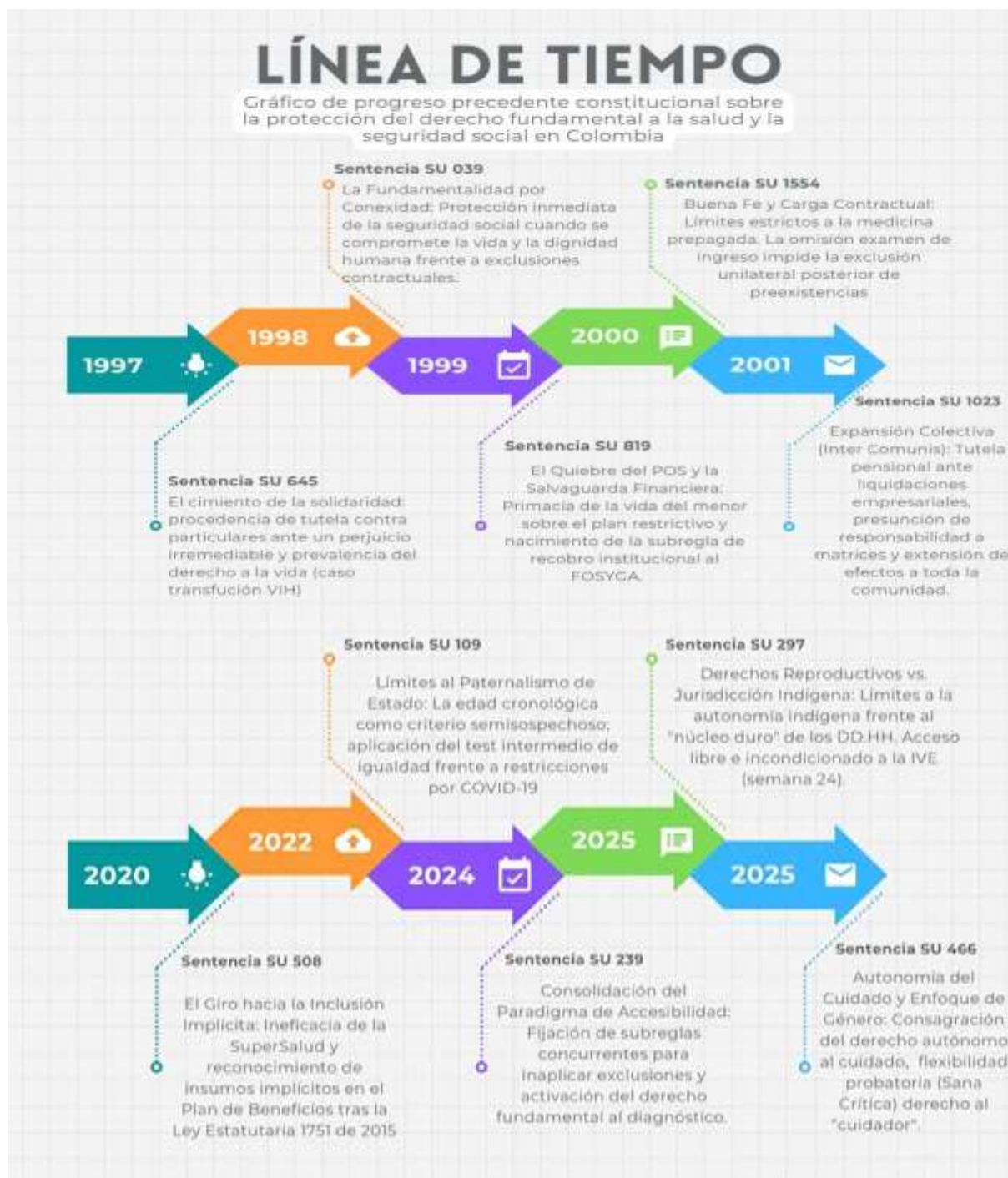
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hechos sintetizados           | <p>Tres mujeres interpusieron tutelas contra distintas EPS solicitando el servicio de cuidador para familiares con alta dependencia funcional. En el caso de Julián (58 años, discapacidad múltiple, Barthel 0/100), su madre de 84 años padece enfermedades crónicas que le impiden seguir cuidándolo de forma exclusiva tras dos décadas de labor. En el caso de Julio (92 años, dependencia severa), falleció durante el trámite. En el caso de la menor Alexandra (16 años, discapacidad intelectual), su familia reside en pobreza extrema en zona rural, sufriendo su madre una exclusión laboral y educativa absoluta para cuidarla; además, a la menor se le practicó una esterilización quirúrgica sin garantías de consentimiento informado. Las EPS negaron los servicios argumentando exclusión del PBS y ausencia de orden del médico tratante.</p> |
| Fundamentos de la tutela      | <p>Las accionantes argumentaron la vulneración de los derechos fundamentales al cuidado, la salud y la vida digna de los agenciados. Sostuvieron que las EPS imponen barreras administrativas ilegales al exigir una orden médica formal e inflexible y omiten evaluar la total imposibilidad material y el agotamiento físico, emocional y económico del núcleo familiar (síndrome del cuidador quemado), lo que traslada una carga desproporcionada de cuidado exclusivamente a las mujeres del hogar, ampliando brechas de género e ignorando el principio constitucional de corresponsabilidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Decisión de primera instancia | <p>Primera instancia: Juzgado 018 Civil Municipal de Bogotá tuteló la salud y</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>ordenó cirugía maxilofacial, pero negó el cuidador por falta de orden médica vigente. Segunda instancia: Juzgado 019 Civil del Circuito de Bogotá confirmó la negativa, aduciendo que el reporte psiquiátrico aportado no constituía una prescripción médica formal.</p> <p>Primera instancia: Juzgado 33 de Pequeñas Causas de Bogotá amparó el derecho y ordenó el servicio de cuidador por la avanzada edad del paciente y la falta de recursos familiares. Segunda instancia: Juzgado 056 Civil del Circuito de Bogotá revocó el fallo, argumentando que la obligación recae primariamente en la familia por solidaridad y requería orden médica.</p> <p>Juzgados de instancia evaluaron las condiciones de extrema vulnerabilidad económica y ruralidad del núcleo familiar y la falta de garantías en el acceso a la red de apoyos institucionales del sector salud y educativo.</p> |
| Ratio decidendi | <p>La Sala Plena establece que tras la expedición de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 se generó un cambio de paradigma: el régimen de salud migró de un modelo restrictivo (donde solo se cubría lo expresamente incluido) a un modelo de inclusión implícita, donde todo aquello que no esté taxativamente excluido se entiende plenamente incorporado al PBS. En consecuencia, insumos como pañales, sillas de ruedas o cremas protectoras están integrados y su negativa injustificada es inconstitucional. Respecto a la Superintendencia de Salud, la Corte determinó que dicho mecanismo padece vacíos normativos y un retraso estructural insostenible (de 2 a 3 años), por lo cual carece de idoneidad y eficacia inmediata, legitimando la procedencia directa de la</p>                                                                                                              |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | acción de tutela. Adicionalmente, el tribunal precisó que, ante la ausencia de orden médica, el juez no debe negar la protección, sino tutelar el derecho al diagnóstico en sus etapas de identificación, valoración y prescripción técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Criterios de unificación | <p>La Corte unificó la jurisprudencia sustituyendo los antiguos estándares por unos más flexibles basados en la sana crítica:</p> <p>Evidente necesidad del servicio: Se sustituye el requisito estricto de "certeza médica" por el de la necesidad patente derivada de la condición de salud y la valoración integral del juez.</p> <p>Afectación desproporcionada sobre el núcleo familiar: Se evoluciona del concepto de "imposibilidad material" al análisis del impacto desproporcionado en la salud física, emocional, proyecto de vida o mínimo vital de la red familiar (prevención del cuidador quemado).</p> <p>Análisis ponderado de capacidad económica: Evaluación cualitativa y flexible de los ingresos frente al costo real del cuidado. Se fijan como indicios de insuficiencia la pertenencia al Sisbén grupos A o B y la afiliación al régimen subsidiado.</p> <p>Red de apoyo: Valoración basada en la convivencia, identidad familiar y lazos de afecto bajo el principio de corresponsabilidad.</p> |
| Decisión definitiva      | <p>T-11.081.978 (Julio): Declaró la carencia actual de objeto por hecho sobreveniente debido al fallecimiento del agenciado.</p> <p>T-10.917.453 (Julián): Revocó las sentencias de instancia. Amparó los derechos y ordenó a EPS Compensar suministrar cuidador las 24 horas del día de forma provisional, mientras un equipo interdisciplinario determina si</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>requiere además enfermería. Reconoció el rol y derechos de la madre cuidadora (Gabriela).</p> <p>T-11.113.200 (Alexandra): Amparó los derechos de la menor. Ordenó a Nueva EPS prestar el servicio de cuidador por 12 horas diarias, transporte y terapias. Declaró el daño consumado respecto de sus derechos sexuales y reproductivos por la esterilización practicada; ordenó investigar penal y disciplinariamente el procedimiento e incorporar a la menor al sistema educativo inclusivo.</p> <p>Órdenes Generales de Política Pública: Ordenó al Ministerio de Salud y a la Superintendencia crear un canal administrativo uniforme y rápido para solicitar el servicio sin tutela (plazo de 4 meses). Ordenó al Ministerio y a la ADRES estudiar el costo del servicio en los últimos 5 años y su impacto fiscal. Ordenó a la Contraloría realizar control fiscal sobre los recursos de recobros de cuidador.</p> |
| <p>Salvamentos y aclaraciones de voto</p> | <p>Aclaración de voto del Magistrado Vladimir Fernández Andrade: Compartió la decisión material de amparo, pero manifestó reparos respecto al segundo criterio adoptado por la Sala Plena para determinar con un nivel exhaustivo de detalle los integrantes del núcleo familiar que deben asumir el cuidado. Sostuvo que trasladar al trámite sumario y expedito de la acción de tutela una indagación probatoria de tal complejidad técnica puede desbordar las capacidades reales del juez constitucional y generar una litigiosidad o actividad probatoria excesiva, limitando la flexibilidad que debe imperar en la valoración judicial en sede de tutela.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 3.2. Figura No 1. Línea de tiempo jurisprudencial



Fuente: Creación propia.

## 3.3. Matriz comparativa

| Fecha y órgano Judicial                                            | Problema Jurídico Decidido (Ratio Decidendi)                                                                                                                            | Regla o estándar jurisprudencial (condición, consecuencias, cargas)                                                                                                                                              | Relación de fallos previos                                                                                                                                                             | Impacto práctico, órdenes judiciales.                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sala plena de la Corte Constitucional. SU-645 3-                   | La tutela procede excepcionalmente si el proceso ordinario es inoportuno para proteger la vida. El                                                                      | Estándar: Si existe un riesgo inminente de perjuicio irremediable a la vida o salud, entonces procede la acción de                                                                                               | Continuidad: Reitera la procedencia excepcional de la tutela frente a perjuicios                                                                                                       | Confirmación del amparo transitorio; obligación a la clínica de prestar tratamiento médico inmediato a                                                                                                                     |
| diciembre de 1997                                                  | principio de solidaridad obliga al prestador a atender al paciente mientras se define la responsabilidad                                                                | tutela de forma transitoria contra particulares que presten servicios públicos, prevaleciendo la protección de la vida por encima de debates de responsabilidad                                                  | irremediables y contra particulares que ejercen servicios públicos, marcando una línea base de exigibilidad del principio de solidaridad                                               | personas en situaciones críticas (como el contagio de VIH por                                                                                                                                                              |
| Sala plena de la Corte Constitucional SU-039 19 de febrero de 1998 | La seguridad social adquiere protección constitucional inmediata cuando su afectación compromete directamente derechos fundamentales como la vida y la dignidad humana. | Si la negativa de hospitalización o tratamiento (basada en supuestas exclusiones contractuales) deteriora gravemente la salud del afiliado, entonces se activa la tutela directa para salvaguardar la vida digna | Continuidad: Desarrolla el criterio de fundamentalidad por conexidad de la seguridad social con la vida y la integridad personal, extendiendo las líneas protectoras trazadas en 1997. | Confirmó la tutela a favor de una persona de la tercera edad con artritis y derrame pleural; ordenó a la EPS suministrar de manera obligatoria todos los tratamientos y servicios médicos necesarios para su recuperación. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sala plena de la Corte Constitucional SU-819 20 de octubre 1999. | Las exclusiones del POS no prevalecen sobre los derechos fundamentales. Ante la falta de capacidad económica y la inexistencia de sustitutos eficaces, el Estado debe asumir el costo protegiendo la sostenibilidad vía recobro. | Si concurren: (i) orden de médico tratante, (ii) riesgo inminente para la vida, (iii) ausencia de alternativa eficaz en el POS, y (iv) falta de recursos del paciente; entonces la EPS debe autorizar el servicio y el sistema le garantiza el recobro ante el FOSYGA. | Continuidad y Distinción: Mantiene la línea de protección en salud por conexidad, pero introduce una distinción operativa crucial : define los criterios estrictos de inaplicación del POS y crea la subregla de equilibrio financiero a través del recobro estatal | Se ordenó garantizar de forma integral un trasplante heterólogo de médula ósea para un menor con leucemia, permitiendo a la EPS el recobro al FOSYGA para no trasladar el riesgo financiero al afiliado |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sala plena de la Corte Constitucional SU-1554 21 de noviembre de 2000 | Las entidades de medicina prepagada tienen la carga contractual e ineludible de identificar preexistencias al inicio de la relación. Si incumplen, no pueden modificar unilateralmente el contrato, violando la buena fe y confianza legítima. | Si la empresa no practica exámenes médicos de ingreso ni consigna expresamente la exclusión en el contrato, entonces pierde la facultad de negar la cobertura posteriormente alegando preexistencias, debiendo prevalecer los derechos del usuario | Fija un hito unificado en materia contractual de medicina prepagada, estableciendo barreras estrictas contra la arbitrariedad unilateral en la ejecución de contratos de adhesión en salud. | Concedió el amparo a favor del usuario; ordenó a la entidad (Colsanitas) prestar de manera integral y obligatoria los servicios médicos requeridos de acuerdo al contrato originalmente celebrado |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

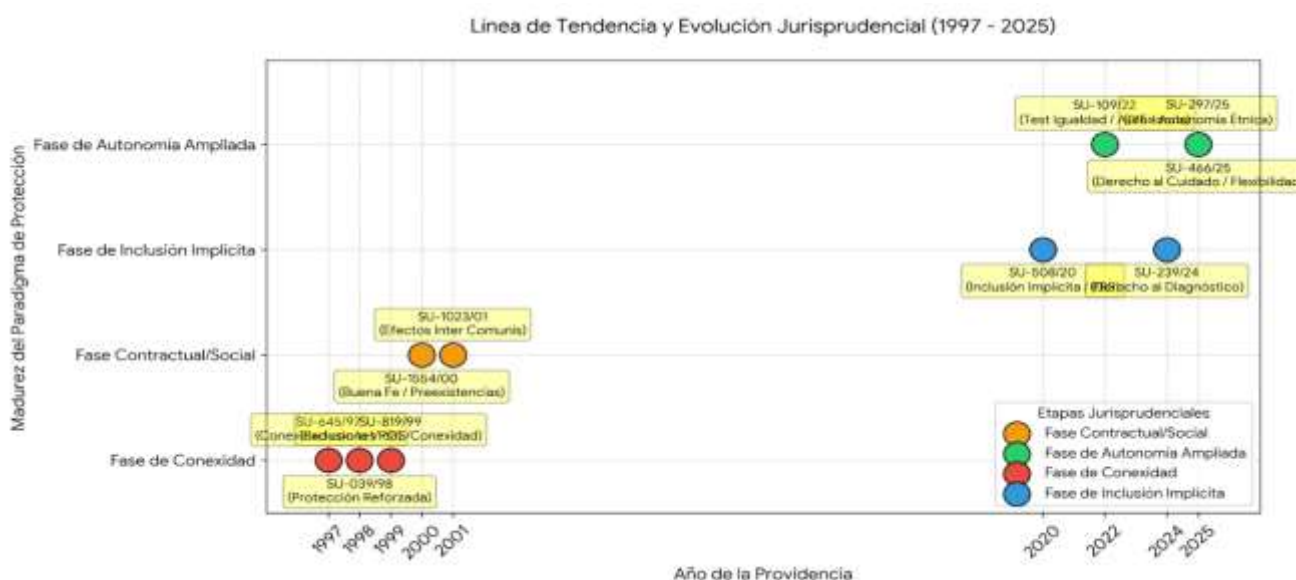
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sala plena de la Corte Constitucional SU 1023 26 de septiembre de 2001. | La tutela procede de forma transitoria ante la afectación del mínimo vital de sujetos de especial protección. Opera una presunción legal (iuris tantum) de responsabilidad subsidiaria de la sociedad matriz para proveer liquidez provisional | Si una empresa en liquidación carece de caja inmediata para cubrir créditos pensionales y existe una matriz controlante, entonces se presume la responsabilidad subsidiaria de esta última y el juez de tutela puede ordenarle proveer los fondos de forma transitoria. | Efectos Inter Comunis: Introduce una innovación procesal de gran impacto: cuando los recursos comunes de una liquidación son insuficientes, el amparo individual se extiende con igualdad de participación a toda la comunidad de afectados. | Otorgó efectos inter comunis a 772 pensionados. Ordenó a la Federación Nacional de Cafeteros (con cargo a sus recursos o al Fondo Nacional del Café) transferir los dineros para pagar mesadas y aportes a salud atrasados |
| Sala plena de la Corte Constitucional SU 508 7 de diciembre de 2020     | El mecanismo ante la SuperSalud no es idóneo por retrasos estructurales masivos (2 a 3 años). Bajo la Ley 1751 de 2015, todo lo no excluido taxativamente se                                                                                   | Si se constata la ineficacia del medio ordinario, el juez de tutela debe conocer el fondo. Si no hay orden médica pero la necesidad es un hecho notorio, se ordena el suministro condicionado a la                                                                      | Adapta y flexibiliza el precedente histórico al nuevo marco de la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751/15), sustituyendo la lógica restrictiva del POS por la                                                                                  | Unificó las subreglas de acceso para insumos (pañales, cremas, sillas de ruedas) y transporte. En los casos activos ordenó el amparo del derecho al diagnóstico y                                                          |
|                                                                         | entiende incluido de forma implícita (como pañales o sillas de ruedas)                                                                                                                                                                         | ratificación del médico o se tutela el derecho al diagnóstico.                                                                                                                                                                                                          | presunción de inclusión implícita del PBS                                                                                                                                                                                                    | suministro efectivo, declarando en otros la carencia actual de objeto                                                                                                                                                      |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sala plena de Corte Constitucional SU 109 24 de marzo de 2022.       | El uso de la edad cronológica como único factor de segregación y confinamiento es severo es discriminatorio y desproporcionado. Las medidas paternalistas estatales encuentran un límite infranqueable en la dignidad y autonomía personal.                | Si una norma utiliza la edad para imponer un tope máximo o una restricción gravosa, entonces se considera un criterio semi sospechoso, obligando al juez constitucional a aplicar un test de igualdad de intensidad intermedia                                     | Distinción por Criterio Semi sospechoso: Distingue el uso de la edad: si fija parámetros mínimos, se aplica un test leve; si impone restricciones o topes máximos, exige un test intermedio, controlando los excesos del paternalismo estatal. | Declaró la carencia actual de objeto por daño consumado (pérdida de vigencia de las normas sanitarias), pero dictó un fallo de fondo protectorio que determinó la vulneración de los derechos y ratificó el deber de aplicar la excepción de inconstitucionalidad |
| Sala plena de la Corte Constitucional SU 239 de 20 de junio de 2024. | Ratifica el cambio de paradigma de la Ley 1751 de 2015 (inclusiones implícitas). Las exclusiones expresas solo se pueden inaplicar si la falta de tecnología vulnera cualificadamente la integridad y el paciente carece de recursos bajo la sana crítica. | Cuatro requisitos concurrentes: (1) Amenaza/vulneración cualificada a la vida o integridad física, (2) Inexistencia de sustituto en el PBS, (3) Incapacidad económica probada bajo la sana crítica, y (4) Prescripción médica o indicios manifiestos de necesidad. | Consolidación del Precedente: Reafirma de manera unificada la ineficacia de la Superintendencia de Salud y fusiona las subreglas pre estatutarias y post estatutarias, blindando el derecho al diagnóstico frente a barreras de las EPS        | Revocó los fallos de improcedencia formal. Concedió la protección al diagnóstico y ordenó a las EPS remitir inmediatamente a los pacientes a sus médicos para la prescripción y entrega de tecnologías de salud                                                   |
| Sala plena de la Corte Constitucional SU-297 de 3 de julio de 2025.  | Prohibir la IVE a mujeres indígenas es violencia de género y discriminación                                                                                                                                                                                | El derecho a la IVE es de carácter incondicionado y libre hasta la semana 24 de gestación (y posterior                                                                                                                                                             | Overruling Corrección Interna: Consolida la jurisprudencia unificada de la Sala                                                                                                                                                                | Declaró daño consumado temporal por los nacimientos forzados. Ordenó                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <p>étnica. La maximización de la autonomía indígena encuentra un límite absoluto en el "núcleo duro" de los derechos humanos y la dignidad de la mujer</p>                                                                                                       | <p>por causales). El sistema de salud (incluido el SISPI) debe garantizarlo de forma inmediata y confidencial sin supeditarlos a avales de cabildos</p>                                                                                                         | <p>Plena, anulando salas de revisión previas (Autos 2396 y 2397 de 2023) que pretendieron relativizar o flexibilizar el derecho a la IVE dentro de los territorios étnicos.</p>                                                                              | <p>reparaciones a las comunidades (diálogos de género), al Ministerio de Salud expedir una resolución de acceso sin barreras para mujeres indígenas, y urgencia a jueces de tutela</p>                                                               |
| <p>Sala plena de la Corte Constitucional SU 466 de fecha 13 de noviembre de 2025.</p> | <p>El cuidado es un derecho fundamental autónomo y justiciable (recibirlo, cuidarse y cuidar). Exigir órdenes médicas inflexibles ignora el principio de corresponsabilidad social y genera el "síndrome del cuidador quemado", ampliando brechas de género.</p> | <p>Reemplaza la "certeza médica" por estándares flexibles de la Sana Crítica: (1) Evidente necesidad patente, (2) Afectación desproporcionada del núcleo familiar, (3) Capacidad económica ponderada (Sisbén A o B es indicio), y (4) Red de apoyo afectiva</p> | <p>Evolución y Distinción: Rompe con los antiguos estándares restrictivos basados en la estricta prescripción médica formal, sustituyéndolos por un enfoque de género, corresponsabilidad estatal y valoración cualitativa de la vulnerabilidad familiar</p> | <p>Ordenó cuidador de 24h y 12h en casos activos; declaró daño consumado por esterilización forzada de una menor; ordenó al Ministerio de Salud crear un canal administrativo rápido sin tutela, y control fiscal a la Contraloría por recobros.</p> |

### 3.4 Análisis de Tendencias Jurisprudenciales

**Figura No 2. Línea de tendencia y evolución jurisprudencial (1997-2025)**



Fuente: Creación propia.

#### **Explicación del gráfico y dinámica de tendencias**

**Fase de Conexidad (1997–1999):** Las sentencias SU-645/97, SU-039/98 y SU-819/99 se ubican en la base de la protección, donde el derecho a la salud no era considerado autónomo, sino que dependía estrictamente de su conexidad con la vida y la dignidad. Las exclusiones del POS eran restrictivas y su inaplicación requería fórmulas médicas obligatorias.

**Fase Contractual/Social (2000–2001):** Con las decisiones SU-1554/00 y SU-1023/01, la Corte empieza a modular las cargas de las entidades prestadoras (cargas de la prueba en preexistencias) y a expandir la protección a colectividades mediante efectos inter comunis para proteger el mínimo vital.

**Fase de Inclusión Implícita (2020–2024):** Un salto cualitativo se observa en las sentencias SU-508/20 y SU-239/24 impulsadas por la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751/15). Aquí la regla se invierte: todo lo que no esté taxativamente excluido se entiende incluido en el PBS. Además, la tutela se erige como vía principal ante la ineficacia de la Superintendencia de Salud.

Fase de Autonomía Ampliada (2022–2025): Las sentencias más recientes (SU-109/22, SU-297/25 y SU-466/25) representan el pico de madurez del tribunal. El enfoque muta hacia la protección diferencial y de género: se limitan los paternalismos estatales arbitrarios (edad), se consagra el núcleo duro de los derechos reproductivos frente a justificaciones étnicas (IVE) y se reconoce el Derecho Fundamental al Cuidado, flexibilizando los estándares probatorios a favor de sujetos en condiciones de vulnerabilidad extrema.

El análisis de las sentencias del bloque (SU-645/97, SU-039/98, SU-819/99, SU-1554/00, SU-1023/01, SU-508/20, SU-109/22, SU-239/24, SU-297/25 y SU-466/25) revela un proceso continuo de constitucionalización del derecho a la salud, transitando desde una visión puramente contractual y restrictiva hacia un modelo de garantía autónoma, integral y de corresponsabilidad social. “Es un derecho intrínseco al ser humano, evidenciado en el hecho de que solo se necesita existir para ser poseedor del mismo, de este modo, la vida se convierte en una condición necesaria para el disfrute de otros derechos” (Corte Constitucional, Sentencia SU-645 de 1997). P. 10), lo que demuestra que, en principio el derecho a la salud era conexo al derecho a la vida y no estaba como un derecho fundamental autónomo.

Por otra parte, es importante mencionar que la Corte mantiene inalterado el criterio de que la acción de tutela es el mecanismo idóneo cuando están en riesgo la vida y la dignidad humana. El principio de solidaridad opera de manera transversal desde 1997 hasta 2025, es por ello que, en el análisis de la sentencia identificada del año 1998, se conculcó que si bien es cierto la pretensión estaba en contra de un privado; continua la línea de que la acción constitucional de Tutela resulta idónea para proteger la salud y la vida de las personas, tal como lo advierte la Corte Constitucional:

A pesar de que se reitera la norma general sobre la inadecuación de la tutela para resolver disputas de carácter estrictamente contractual, se admite en este caso, debido a la naturaleza de servicio público de la empresa demandada y teniendo en cuenta los derechos

fundamentales implicados, ya que, de otro modo, la efectividad del recurso judicial que podría haber utilizado la actora (acción contractual ordinaria) resultaría ineficaz y tardía ante la particular situación que enfrenta respecto a la afectación que padece. (Corte Constitucional, sentencia SU 819, 1998. Pág.12).

En situaciones donde se presente una preexistencia en el Plan de Medicina Prepagada, la controversia debe ser resuelta, en principio, por la justicia ordinaria, siempre que se refiera únicamente a asuntos de índole estrictamente contractual; no obstante, se puede conceder una tutela con efectos temporales e incluso definitivos, cuando las circunstancias del solicitante lo justifiquen para proteger la salud, y en relación con ello, la vida, de este y de los beneficiarios del contrato.

Así mismo se fija desde ese momento una regla, frente a los particulares cuando prestan un servicio público, la Corte estableció que las entidades de medicina prepagada tienen la carga de identificar las enfermedades preexistentes al inicio de la relación contractual mediante examen médico o estipulación expresa; Sí incumplen ese deber, no pueden modificar posteriormente el contrato para excluir la cobertura de una enfermedad alegando una preexistencia. Tal conducta desconoce los principios de buena fe y confianza legítima y puede comprometer los derechos fundamentales a la vida y a la salud, en consecuencia, cuando la negativa del servicio pone en riesgo dichos derechos, la tutela procede para ordenar la prestación del tratamiento conforme al contrato originalmente celebrado. Tal como lo expone la Corte Constitucional:

La provisión del servicio público se evalúa sustancialmente en función de la responsabilidad atribuida al privado. De acuerdo con el artículo 365 de la Constitución, los servicios públicos son parte esencial de la finalidad social del estado, están regidos por el marco legal establecido por la Ley y pueden ser suministrados por el Estado, de forma directa o indirecta, por comunidades organizadas o por individuos. Al asumir el encargo, los entes particulares lo hacen bajo el marco legal establecido por la Constitución y la ley, y, aunque mantengan su carácter privado, son responsables, al igual que las entidades estatales, en lo relacionado con la prestación del servicio. Por eso se considera que tienen, en cuanto a derechos fundamentales, un estatus similar al de la autoridad pública. (Corte Constitucional, Sentencia SU 1554, 2020).

Es inminente, en el caso de la “subordinación” de la naturaleza privada de una empresa a la naturaleza pública del servicio prestado, lo que significa que no puede ampararse en su condición de derecho privado, ya que, al prestar servicio público, como lo es la salud, debe protegerse a través de la acción Constitucional de Tutela.

En cuanto al tema de las exclusiones del POS no prevalecen sobre la protección efectiva de los derechos fundamentales, cuando un procedimiento ha sido ordenado por el médico tratante, es indispensable para evitar la muerte o un grave deterioro de la salud, no existe sustituto eficaz y el paciente carece de capacidad económica, la EPS debe suministrarlo; la sostenibilidad financiera del sistema se protege mediante el recobro al FOSYGA y no trasladando el riesgo al paciente. Tal como lo anunció la Corte Constitucional:

Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia que mantenía esta Corporación antes de la promulgación de la Ley 508 de 1999, en lo que respecta a servicios de salud no cubiertos por el POS, las disposiciones legales no son aplicables cuando se encuentra en juego el derecho fundamental a la vida. En estos casos, de acuerdo con la Corte, las EPS deben reclamar al Estado, a través del FOSYGA el monto de los tratamientos y medicamentos que deben ser proporcionados fuera del POS, con el correspondiente derecho a exigir el reembolso de dichas cantidades. (Corte Constitucional, Sentencia SU- 819, 1999. Pág.11).

Este apartado está en concordancia con la sentencia SU-508 de 2020, sobre las exclusiones de tratamientos y tecnologías médicas, la Ley 1751 de 2015, esta legislación se distingue por recuperar la jurisprudencia constitucional y establecer el derecho a la salud como esencial. El marco normativo también desarrolló la dimensión positiva del derecho fundamental a la salud a través del sistema de salud, que se definió en el artículo 4 como el conjunto estructurado y cohesionado de principios, normas, políticas públicas, instituciones, competencias y procedimientos; facultades, obligaciones, derechos y responsabilidades; financiamiento, controles, información y evaluación que el Estado disponga para garantizar y materializar el derecho fundamental a la salud. Tal como lo indicó la Corte Constitucional:

El poder legislativo transformó el enfoque de las exclusiones y adoptó un modelo conocido como Plan

de Beneficios en Salud. Esto se considera parte del ámbito esencial del derecho fundamental a la salud y se asegura a través de la oferta de servicios y tecnologías de salud, organizados en torno a una visión holística de la salud, que abarque su promoción, la prevención, el alivio, la atención de la enfermedad y la rehabilitación de sus secuelas, de acuerdo con el artículo 15 inciso 1. (Corte Constitucional, sentencia SU-508, 2020. Pág. 8).

La Corte Constitucional reafirmó que el derecho al diagnóstico, como parte esencial del derecho fundamental a la salud, conlleva una evaluación técnica, científica y adecuada que determine con precisión la condición de salud del paciente y los tratamientos médicos necesarios. Además, indicó que el diagnóstico efectivo se divide en tres fases, a saber: a) la fase de identificación, que incluye la realización de los exámenes previos ordenados basándose en los síntomas del paciente; b) una vez se reciben los resultados de los exámenes previos, se necesita una valoración pronta y exhaustiva por parte de los especialistas que correspondan; y c) por último, los especialistas tendrán que prescribir los tratamientos

En las primeras sentencias (SU-645/97 y SU-819/99) la salud se protegía exclusivamente por su conexidad con la vida. A partir de la vigencia de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 (analizada en las sentencias de 2020, 2024 y 2025), la salud se consolida como un derecho fundamental autónomo e incondicionado. Del nexo formal médico a la flexibilización por la sana crítica: Se pasó de exigir rigurosamente la orden del médico adscrito a la EPS, a tutelar el derecho al diagnóstico ante la ausencia de fórmulas, culminando en la SU-466/25 con la flexibilización probatoria basada en la necesidad patente y la prevención del síndrome del cuidador quemado.

Se consolida la regla de Inclusión Implícita (PBS) derivada de la Ley 1751 de 2015: todo lo que no esté taxativamente excluido del Plan de Beneficios se entiende plenamente incorporado.

Figura No 03. Representación Gráfica de la Evolución Jurisprudencial.



Fuente: construcción propia.

Figura No 04. Variaciones argumentativas frente al mismo problema jurídico.

| Variaciones Argumentativas frente al Mismo Problema Jurídico |                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Época / sentencia                                            | Argumentación principal.                                                                                                                                           | Mecanismo de sostenibilidad                                                                    |
| Fase inicial (SU-819 / 1999)                                 | El paciente debía mostrar la carencia de recursos y debía existir orden estricta de médico adscrito a la EPS.                                                      | Recobro total al FOSYGA para no trasladar el riesgo al usuario del sistema de salud.           |
| Fase de transición (SU-239 / 2024)                           | Si no hay orden médica por barreras administrativas, se activa el amparo constitucional "tutela", con el denominado derecho al diagnóstico.                        | Presupuesto máximos / reglas estrictas de inaplicación jurisdiccional.                         |
| Fase actual (SU-466 / 2025)                                  | Se flexibiliza la "erteza médica" por la "necesidad patente" evaluada por el operador de justicia, el símben A o B es indicio suficiente de incapacidad económica. | Corresponsabilidad Estado - sociedad-familia con órdenes de política pública e impacto fiscal. |

Fuente: Creación propia.

### ***3.5 Coherencia de la jurisprudencia.***

En la identificación de las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, se observa en la SU-1554/00 (Colsanitas) y la SU-039/98 (Colmena). La Corte subsume los hechos del caso concreto (negar atención alegando preexistencias no pactadas expresamente de manera previa) dentro del supuesto normativo del principio de la buena fe contractual y el derecho a la salud. Al encajar perfectamente el incumplimiento de la EPS, se deriva la obligación directa de cobertura. En cualquier caso, es importante señalar que la Corte Constitucional ha establecido que el amparo a través de tutela es excepcional en la medicina prepagada, ya que se trata de disputas que surgen de acuerdos privados realizados por las partes, los cuales, en principio, deberían ser solucionados mediante acciones civiles o comerciales ordinarias.

Sin embargo, en ciertos casos se ha aceptado la protección de los derechos del usuario a través de tutela, debido a la ineficacia de los métodos habituales de defensa judicial y cuando la firma o cumplimiento de estos contratos afecta la efectividad de los derechos fundamentales, “la Corte ha analizado contratos de medicina prepagada debido a las acciones de tutela interpuestas por usuarios que han solicitado la cobertura de tratamientos o medicamentos esenciales para su salud, pero que han sido excluidos en los contratos firmados” (Quintana, A, 2016, P.4).

La Corporación determinó que la compañía debía comportarse de manera honesta según las condiciones mencionadas anteriormente y destacó la obligación de llevar a cabo un análisis previo y la imposibilidad de alterar el contrato de forma unilateral; Y ante la opción de eludir la responsabilidad al demostrar la mala fe del usuario, se determinó que no era lógico pedirle a alguien que tuviera certeza sobre si sufre o no de una enfermedad específica, ya que para esto se necesitan conocimientos técnicos y el simple hecho de estar convencido de estar sano no puede suponer una actuación de mala fe por parte del usuario.

Por otra parte, en la sentencia SU-1023 de 2001, se reafirmó la procedencia excepcional y transitoria de la acción de tutela para el cobro de acreencias pensionales. La Corte Constitucional argumentó que, si bien la vía ordinaria o el concurso liquidatario son los mecanismos formales, estos pierden idoneidad y eficacia cuando está de por medio el mínimo vital y la subsistencia digna de personas de la tercera edad, cuya condición de vulnerabilidad no soporta las dilaciones de un trámite mercantil. En segundo lugar, la Corte aplicó la presunción legal de responsabilidad subsidiaria de la matriz (establecida en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995).

Así mismo, se determinó que ante la falta de caja o liquidez inmediata de una filial en liquidación para atender créditos de primer orden (pensiones), se presumen las actuaciones que vinculan a la sociedad matriz o contratante; Por lo tanto, el juez de tutela está facultado para ordenar transitoriamente a la empresa que provea la liquidez requerida para salvaguardar los derechos fundamentales de los pensionados mientras la justicia ordinaria resuelve la responsabilidad de fondo.

En un tercer análisis, la Sala Plena desestimó las pretensiones del liquidador al señalar los límites de la agencia oficiosa; Preciso que un administrador de un proceso liquidatario no está legitimado para actuar en nombre de los pensionados si no demuestra la imposibilidad física o mental de estos para defenderse por sí mismos y si no cuenta con su posterior ratificación. En cuanto a la figura Inter comunis La Corte Constitucional concedió “efectos inter comunis respecto al proceso de liquidación obligatoria de la CIFM, dado que todos los pensionados forman parte de una comunidad, en condiciones de igualdad de participación, y con el objetivo de prevenir desequilibrios injustificados entre ellos”. (Corte Constituciones Sentencia SU-1023, 2001, Pág. 2)

La Corte advirtió que conceder el amparo de forma aislada únicamente a los pensionados que acudieron a la tutela generaba una grave distorsión: al ser los recursos de la empresa

insuficientes, las órdenes individuales agotaban la caja disponible y dejaban desprotegidos a los demás jubilados que estaban en la misma situación pero que no habían tutelado; para proteger de forma equitativa el derecho a la igualdad y garantizar la participación proporcional en los activos, la Corte unificó el criterio ordenando que los efectos de la protección transitoria se extendieran a los 772 pensionados de la empresa, estuvieran o no vinculados formalmente a las tutelas tramitadas. En consecuencia, ordenó a la Federación Nacional de Cafeteros poner a disposición del liquidador los fondos necesarios para cancelar las mesadas causadas y los aportes a salud pendientes.

En cuanto a la SU-109/2022 (confinamiento de adultos mayores), la Corte realiza una distinción sobre el uso de la edad en las normas. Establece que cuando la edad se usa para fijar un parámetro mínimo de acceso a beneficios se aplica un test de igualdad leve, pero cuando se usa para imponer un tope máximo o una restricción de libertad (como en la pandemia), constituye un criterio semisospechoso que exige un test de igualdad intermedio.

En efecto, las medidas en cuestión estuvieron en vigor durante un lapso de tiempo. Por un lado, el aislamiento preventivo para este grupo de personas estuvo vigente desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 25 de agosto de 2020, momento en el cual el Gobierno decidió “recomendar a las personas mayores de 70 años el autoaislamiento preventivo”. Tal como lo dispuso la corte Constitucional:

(...) utilizar la edad cronológica como el único factor para segregar a un sector de la población e imponerle un confinamiento más gravoso no es constitucionalmente justificado ni necesario. Si bien el Estado buscaba proteger a un grupo vulnerable, las medidas paternalistas no pueden anular la dignidad y la autonomía de los sujetos de especial protección, por lo que el trato diferenciado se tradujo en una discriminación que violó directamente sus libertades fundamentales. (corte Constitucional. Sentencia SU-109, 2022. Pág.97)

Como solución, la Sala entendió que lo correcto habría sido que los jueces de primera instancia aplicaran la excepción de inconstitucionalidad. Sin embargo, dado que se había

establecido una falta actual de objeto, creyó necesario advertir al Gobierno Nacional para que en futuras ocasiones evite decretar medidas restrictivas de derechos fundamentadas únicamente en un criterio de edad.

Por otra parte, la sentencia SU 239 de 2024 La Sala Plena fundamentó su decisión en un profundo análisis del cambio de paradigma traído por la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015). La Corte explicó que el sistema de salud colombiano dejó atrás el modelo restrictivo de “inclusiones explícitas” (donde solo se cubría lo que la norma listaba taxativamente) y adoptó un esquema de inclusiones implícitas, según el cual todo servicio, tecnología o insumo que requiera un paciente se entiende garantizado por el Plan de Beneficios en Salud (PBS), salvo que se encuentre expresamente excluido mediante un trámite regulatorio formal. Bajo este entendimiento, negar insumos indispensables para el bienestar físico y la dignidad humana constituye un acto inconstitucional. Tal como lo indico la Corte Constitucional:

(...) cuando un paciente padece una necesidad evidente, pero carece de la prescripción de un médico adscrito, el juez no debe negar la pretensión, sino tutelar el derecho en sus fases de identificación, valoración y prescripción técnica para obligar a la EPS a remitirlo de inmediato al especialista. (Corte Constitucional, Sentencia SU-239, 2024).

Los casos examinados por la Sala Plena y la jurisprudencia permiten afirmar que hay una barrera generalizada cuando las mujeres buscan en el sistema de salud un diagnóstico y tratamiento para los síntomas derivados de un procedimiento estético.

Así mismo, se identificó en la SU-297/2025 (Caso IVE en comunidades indígenas), la Corte realiza una armonización ponderada entre el principio de maximización de la autonomía indígena (Art. 246 CP) y los derechos fundamentales de las mujeres y niñas a la salud sexual y reproductiva. Al armonizarlos, determina que la autonomía étnica no es absoluta y encuentra un límite infranqueable en el "núcleo duro" de los derechos humanos y la autodeterminación de la mujer.

El acceso a la IVE se vincula a diversas disposiciones constitucionales que están reflejadas tanto en la Carta Magna como en los tratados de derechos humanos aprobados por el Estado colombiano. Efectivamente, el proceso de definición de este derecho se fundamenta, como lo demuestra la jurisprudencia relevante desde la Sentencia C-355 de 2006 hasta la Sentencia C-055 de 2022, en los derechos a la privacidad (art. 15), al pleno desarrollo de la personalidad (art. 16), al derecho a la libertad de conciencia (art. 18), Constitución Política (art. 13), para tomar decisiones sobre sexualidad y reproducción (arts. 13, 42 y 43) y en relación a la salud (art. 49). Es una base múltiple que está estrechamente relacionada con la filosofía liberal y social de la Constitución de 1991.

La SU-297 de 2025, es una decisión muy importante en cuanto al tema de la IVE, ya que, en la ratio decidendi. La Corte Constitucional, indica:

(...) Su actuación continua constituyó una infracción del derecho de las accionantes a acceder a la IVE. La resolución de las autoridades indígenas de resistir su práctica, a pesar de ser titulares de un derecho absoluto para tomar esa decisión, conllevó a ignorar el núcleo esencial de los derechos humanos -que actúa como un límite inquebrantable- ya que obstaculizó totalmente la defensa del derecho de acceso a la IVE, es decir, la capacidad de decidir libremente sobre ella cuando esta elección se efectúa antes de la semana 24, incluso. (Corte Constitucional SU-297, 2025. Pág.49).

La Corte Constitucional determinó que prohibir a mujeres, jóvenes y niñas indígenas la práctica de la IVE constituye una forma de violencia de género y discriminación étnica. Si bien existe un mandato de maximización de la autonomía indígena, este encuentra un límite absoluto en el "núcleo duro" de los derechos humanos. El derecho a la IVE cuenta con una faceta de defensa que faculta a las personas gestantes a decidir de forma autónoma e incondicionada la interrupción hasta la semana 24 inclusive, por ende, condicionar u oponerse al procedimiento basándose en los usos y costumbres de un pueblo étnico transgrede directamente la Constitución, el bloque de constitucionalidad y destruye por completo el derecho fundamental de la mujer.

En este caso en particular se encuentra una recepción Inter sistémica (Bloque de

Constitucionalidad) claramente evidenciada en la SU-297/2025, donde para resolver la tensión en los territorios indígenas la Corte integra al ordenamiento interno normas del derecho internacional de los derechos humanos como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW. De este modo, fundamenta el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no solo en la Constitución local, sino en los estándares internacionales de protección contra la violencia de género.

Por último, en la SU-466/2025 (Derecho al Cuidado), la Corte realiza un overruling parcializado o sustitución de estándares procesales, pues la Corte unificó la jurisprudencia sustituyendo los antiguos estándares por unos más flexibles basados en la sana crítica: Evidente necesidad del servicio: Se sustituye el requisito estricto de “certeza médica” por el de la necesidad patente. Asimismo, modificó el concepto rígido de “imposibilidad material” de la familia hacia el análisis del impacto desproporcionado (“cuidador quemado”). Tal como lo expresa, la Corte Constitucional:

Específicamente, las acciones a corto plazo buscan aumentar el acceso real al servicio de cuidadores dentro del esquema actual, cuyo financiamiento y funcionamiento están relacionados con el sistema de seguridad social en salud. Estas directrices se enfocan en la estandarización de procesos; sobre todo, a través del diseño de un camino administrativo eficiente que facilite el acceso al servicio de cuidador, sin impedimentos ni obstáculos. Asimismo, implica una planificación financiera consciente a corto plazo, que contemple la recolección de información pertinente para identificar la fuente de financiamiento adecuada y mecanismos de supervisión de los recursos. (Corte Constitucional, Sentencia SU-466, 2025. Pág. 213).

Es una sentencia hita porque conmina a las eps a prestar el servicio de cuidador, en el cual la ratio decidendi consistió en determinar que, luego de la promulgación de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, se produjo un cambio de paradigma: el sistema de salud pasó de un modelo restrictivo (donde solo se abarcaba lo que estaba expresamente mencionado) a un modelo de inclusión implícita, donde todo lo que no está específicamente excluido se considera completamente incluido en el PBS. Por lo tanto, elementos como pañales, sillas de ruedas o cremas protectoras están incluidos y su rechazo sin justificación es inconstitucional.

### 3.6 Conclusión

El estudio metódico de la evolución dogmática y jurisprudencial, el cual fue ofrecido en el análisis de línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, permite acometer un equilibrio final sobre el estado actual en el que se encuentra el derecho a la salud y la seguridad social en Colombia, ello fue posible gracias al estudio de las sentencias hitos de la Corte Constitucional, ya que con este estudio se dieron a conocer los giros hermenéuticos, las reglas de operación y las tensiones estructurales que explican el sentido del derecho a la salud y la seguridad social como derecho fundamental.

El principal resultado de este estudio consiste en el insoslayable cambio de paradigma propiciado por la Ley Estatutaria de Salud 1751 del 2015, que se ha impuesto frente a la vieja regla general de la conectividad y el modelo del Plan Obligatorio de Salud (POS), para imponer la salud como un derecho fundamental independiente e incondicionado con el derrotero del modelo de inclusiones implícitas del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

A partir de esta construcción dogmática se derivó una regla operativa muy clara; ante la conculcación o el inminente riesgo de las dimensiones esenciales del derecho a la salud (diagnóstico oportuno, IVE, acceso a cuidadores, etc.), la acción de tutela es el instrumento constitucional por antonomasia, preferente e idóneo; esta regla operativa desplaza procesalmente las vías ordinarias o las administrativas por su ausencia de eficacia real e inmediata. El ámbito de aplicación de esta regla consolidada es absolutamente nacional; ya que tiene fuerza vinculante erga omnes, tanto los jueces o entes territoriales como los entes que pertenecen al Sistema Indígena (SISPI) y los operadores privados de salud o medicina prepagada deben acatarlo.

A pesar de lo garantista, la línea jurisprudencial revela un nuevo remanente de la conflictividad dialéctica de la progresividad ampliativa de coberturas desde ópticas diferenciales-

interseccionales junto con el principio de sostenibilidad financiera y fiscal que incumbe al Estado, el cual se concretiza en las conflictividades por los recobros ante la ADRES y los Presupuestos Máximos. En el marco de esta tensión y para lidiar con los vacíos existentes, la Corte presenta un estándar de flexibilización probatoria alrededor de la sana crítica, que modifica levemente el cumplimiento del estándar de certeza médica, por el de valoración judicial de la necesidad evidente, lo cual impacta de manera positiva en la carga procesal a presentar por el accionante, en relación con indicios de vulnerabilidad socioeconómica o afectaciones al núcleo familiar.

Finalmente, la jurisprudencia constitucional colombiana obtiene un lugar de privilegio como motor de cambio de la política pública material y como punto de referencia en Suramérica que, insta al Estado a saldar deudas institucionales, convirtiendo a la autonomía personal y a la dignidad humana en dos frenos únicos e infranqueables ante las fronteras fiscales, administrativas o de jurisdicciones étnicas tradicionales.

### **Referencias**

Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena. (1997). Sentencia SU-645. Magistrado ponente

Fabio Morón Díaz.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/su645-97.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena. (1998). Sentencia SU. Magistrado Ponente

Hernando Herrera Vergara.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/su039-98.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena. (1999). Sentencia SU-819. Magistrado Ponente

Álvaro Tafur Galvis.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/su819-99.htm>

Corte Constitucional de Colombia. (2000). Sentencia SU-1554. Magistrada ponente Cristina

Pardo Schlesinger.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/su1554-00.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena. (2001). Sentencia SU-1023. Magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/su1023-01.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena. (2020). Sentencia SU-508. Magistrados Ponentes Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/su508-20.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena. (2022). Sentencia SU-109. Magistrada ponente Paola Andrea Meneses Mosquera.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2022/su109-22.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena. (2024). Sentencia SU-239. Magistrado ponente José Fernando Reyes Cuartas.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/su239-24.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena. (2025). Sentencia SU-297. Magistrado ponente José Fernando Reyes Cuartas.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/SU297-25.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena. (2025). Sentencia SU-466. Magistrada ponente Lina Marcela Escobar Martínez.

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/SU466-25.htm>

Quintana, A. (2016). El papel de la Corte Constitucional en el análisis de los contratos de medicina Prepagada. *Revista. salud pública*.18(5):827-836, 2016, 1-3

<http://dx.doi.org/10.15446/rsap.v18n5.45135>